



Resolución No. No 0024 09 ENE. 2007

Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

En uso de sus facultades legales, en especial de las conferidas en los artículos 50 y 73 del Código Contencioso Administrativo y 37 del Decreto 564 de 2006, y en los Decretos Distritales 550 de 2006, artículo 4º literal n) y 191 de 2006 y,

CONSIDERANDO

I.- Que el 12 de octubre de 2006, el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, expidió la Resolución No. 00953 *"Por la cual se decide una solicitud de revocatoria directa presentada respecto de la Licencia de Construcción No. LC 04 – 4 – 0861 del 30 de junio de 2004, expedida por el Curador Urbano No. 4 de Bogotá D. C."*, en la que se resolvió:

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer personería para actuar en las presentes diligencias al doctor **EFRAÍN FORERO MOLINA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.778.354 de Bogotá, con Tarjeta Profesional No. 97714 del C. S. de la J., conforme al poder otorgado en debida forma por el señor **ALFONSO GARCÍA GALVIS**, representante legal de la sociedad **ALTOS DE BELMONTE LTDA.**, hasta el 29 de julio de 2006, fecha en que le fue otorgado poder especial, amplio y suficiente al doctor **ALFONSO VALDIVIESO SARMIENTO**.

ARTÍCULO SEGUNDO: Revocar la Licencia de Construcción No. LC 04 – 4 – 0861 del 30 de junio de 2004, expedida por el Curador Urbano No. 4 de Bogotá D. C., de conformidad con las consideraciones expuestas en los Razonamientos del Despacho.

ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de lo ordenado en el artículo precedente, declarar que la Resolución Administrativa No. RES 04 – 4 – 0702 del 11 de agosto de 2002, expedida por el Curador Urbano No. 4 de Bogotá, la Resolución Administrativa No. RES 04 – 4 – 0922 del 17 de septiembre de 2004, expedida por el Curador Urbano No. 4 de Bogotá D. C., la Resolución Administrativa No. RES 04 – 4 – 0983 del 12 de octubre de 2004, expedida por el Curador Urbano No. 4 de Bogotá D. C., la Resolución Administrativa No. RES 04 – 4 – 1056 del 8 de noviembre de 2004 expedida por el Curador Urbano No. 4 de Bogotá D. C., el Auto de Trámite dentro del expediente No. 02 – 4 – 0896 del 31 de enero de 2005, expedido por el Curador Urbano No. 4 de Bogotá D. C., la Resolución No. ALC RES 05 – 4 – 0059 del 8 de febrero de 2005 expedida por el Curador Urbano No. 4 de Bogotá D. C., y la Resolución No. 0962 del 12 de diciembre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, por ser accesorias a la Licencia de Construcción revocada, quedan sin valor y sin efecto jurídico.

24



Continuación de la Resolución No. No 0024 09 ENE. 2007

Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

ARTÍCULO CUARTO: *Enviar copia de la presente decisión y de la totalidad de la actuación administrativa surtida por el Curador Urbano No. 4 de esta ciudad, a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que dicho organismo jurisdiccional adelante las actuaciones de su competencia.*

ARTÍCULO QUINTO: *Enviar copia de la presente decisión y de la totalidad de la actuación administrativa surtida por el Curador Urbano No. 4 de esta ciudad, a la Procuraduría General de la Nación, con el fin que dicho organismo de control adelante las actuaciones de su competencia.*

ARTÍCULO SEXTO: *Enviar copia de la presente decisión a la Alcaldía Local de Chapinero, con el objeto de que dicha autoridad dentro de las competencias policivas en materia urbanística que le han sido asignadas por la Ley, adelante las actuaciones a que haya lugar.*

ARTÍCULO SÉPTIMO: *Notificar el contenido de la presente decisión al señor ALFONSO GARCÍA GALVIS, representante legal de la sociedad ALTOS DE BELMONTE I LTDA., titular de la Licencia que en el artículo segundo que antecede se revoca, o a su apoderado. Se advierte que contra esta Resolución procede el recurso de reposición el cual podrá interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la desfijación del Edicto, según el caso.*

ARTÍCULO OCTAVO: *Notificar el contenido de la presente decisión al Contralor Distrital, al Secretario Técnico de la Comisión de Veedurías a las Curadurías Urbanas y al Agente del Ministerio Público.*

(...)"(Negrillas y subrayas fuera de texto)

II.- Que la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, fue notificada por edicto fijado el 24 de octubre de 2006 y desfijado el 7 de noviembre del año en curso, entre otros, al señor **ALFONSO GARCÍA GALVIS**, Representante Legal de la sociedad **ALTOS DE BELMONTE I LTDA** y a su apoderado, doctor **ALFONSO VALDIVIESO SARMIENTO**.

III.- Que el 15 de noviembre de 2006, mediante escrito con número de radicación DAPD 1 – 2006 – 42007, el doctor **ALFONSO VALDIVIESO SARMIENTO** (en adelante el apoderado), interpuso "... **recurso de reposición y en subsidio de apelación** contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006...", en la que solicitó "... se revoque totalmente la Resolución y en consecuencia, se confirme la vigencia plena de la citada licencia de construcción¹.". (Pie de página fuera de texto), petición que fundamenta, en una serie de argumentos que serán analizados en el siguiente acápite.

¹ Esta expresión hace referencia a la Licencia de Construcción No. LC 04 – 4 – 0861 del 30 de junio de 2004, expedida por el Curador Urbano No. 4 de esta ciudad.



Continuación de la Resolución No. No 002409 ENE. 2007

Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

RAZONAMIENTOS DEL DESPACHO

Procede este Despacho a resolver el recurso de reposición presentado por el apoderado, contra de la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006 expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, conforme las siguientes consideraciones:

Precisión previa.

En relación con los recursos de reposición y en subsidio de apelación, interpuestos por el apoderado, debe indicarse:

- Tal como se expresó en el artículo séptimo de la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el DAPD, dicho acto administrativo es objeto del recurso de reposición.

- Contrario sensu, la apelación solicitada es improcedente en el presente trámite de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 50 y 81 del Código Contencioso Administrativo que en su orden establecen que: "... no habrá apelación de las decisiones de los ministros, jefes de departamentos administrativos, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas o de las unidades administrativas especiales que tengan personería jurídica..." y que "en los asuntos departamentales y municipales se aplicarán las disposiciones de la parte primera de este código, salvo cuando las ordenanzas o los acuerdos establezcan reglas especiales en asuntos que sean de competencia de las asambleas y concejos...".

El Departamento Administrativo de Planeación Distrital², tiene una organización autónoma y el ejercicio de las funciones que las disposiciones legales le han atribuido deben ser desempeñadas de la misma manera. Por ello contra las decisiones emitidas por el Director del Departamento sólo procede el recurso de reposición al no tener superior funcional dentro de dicha estructura organizacional.

En relación con el asunto que nos ocupa, el artículo 50 del C. C. A. (aplicable en las actuaciones de todas las ramas del poder público en todos sus órdenes y en los asuntos departamentales y municipales de conformidad con lo consagrado en los artículos 1º y 81 del citado Código), estableció la improcedibilidad del recurso de apelación contra los actos de los ministros, jefes de departamentos administrativos, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas, reconociendo a los funcionarios antes mencionados su calidad de superiores jerárquicos y máximas autoridades administrativas en sus respectivas entidades, razón por la cual sobre sus decisiones no procede recurso de apelación.

Conforme a lo anterior, este Despacho solo dará trámite al recurso de reposición impetrado.

² En la actualidad la Secretaría Distrital de Planeación



Continuación de la Resolución No. No 0024 09.ENE.2007

Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

1. Requisitos de oportunidad y procedencia para la interposición del recurso de reposición.

a. Oportunidad.

Revisado el expediente se observa que el recurso de reposición se presentó el 15 de noviembre de 2006, dentro del término establecido en el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que el día 7 de noviembre de 2006 se desfijó el edicto mediante el cual se notificó al señor **ALFONSO GARCÍA GALVIS**, Representante Legal de la Sociedad Altos de Belmonte I Ltda. y a su apoderado, del contenido de la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006.

b. Procedencia.

El recurso de reposición es procedente de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 50 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo séptimo de la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006.

c. Competencia.

Para la época en que se inició el trámite de la revocatoria de la Licencia de Construcción No. LC 04 – 4 – 0861 del 30 de junio de 2004, expedida por el Curador Urbano No. 4 de Bogotá D. C., se encontraba vigente el Decreto Distrital No. 449 del 21 de diciembre de 2005 derogado en el transcurso de dicho trámite por el Decreto Distrital 191 del 8 de junio de 2006, normas que asignaron al Departamento Administrativo de Planeación Distrital, la competencia para conocer, tramitar y resolver, las revocatorias directas que se presentaran contra los actos administrativos mediante los cuales los Curadores Urbanos de Bogotá D. C., hubiesen otorgado o negado Licencias Urbanísticas.

2. En cuanto a la sustentación y el análisis de fondo del escrito de reposición.

En el presente numeral, se analizarán los argumentos en los que el apoderado fundamenta la solicitud de revocatoria de la Resolución 00953 del 12 de octubre de 2006, proferida por esta entidad, contenidos en el capítulo denominado **"I. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD CONTRA EL ACTO RECURRIDO"**, así:

2.1. En cuanto al numeral 1 del capítulo I., del escrito de reposición, denominado "En cuanto al cumplimiento de los requisitos formales para la presentación de la revocatoria directa."

En el escrito de reposición, el apoderado realiza una serie de alegaciones relacionadas con la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, respecto de las que este Despacho se



Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

pronuncia de fondo, así:

a. En cuanto a la competencia del Contralor Distrital para presentar solicitudes de revocatorias directas.

En relación con la competencia del Contralor Distrital para solicitar la revocatoria directa, debe indicarse:

- El artículo 267 de la Constitución Política de 1991, señala que la Contraloría General de la República y por extensión, las contralorías departamentales y/o municipales, se encargarán de realizar el control fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos de la Nación³, labor que incluye "... el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. ..." (Negrillas y subrayas fuera de texto), labor que la Corte Constitucional de Colombia ha establecido como un "... Control fiscal del Estado sobre la Administración Pública (gestión, actividad y actos de funcionarios) y las personas particulares (públicas o privadas) que manejen fondos o bienes del Estado ..."⁴, donde las contralorías "... vigilan el manejo fiscal y administrativo, el cumplimiento de la ley y la moralidad pública, y que verifican los resultados de las gestiones estatales"⁵ (Negrillas y subrayas fuera de texto).
- En materia urbanística, el Contralor Distrital puede realizar peticiones de revocatoria directa, en la medida que el artículo 4 de la Ley 388 de 1997, dispone:

"Artículo 4º.- Participación democrática. En ejercicio de las diferentes actividades que conforman la acción urbanística, las administraciones municipales, distritales y metropolitanas deberán fomentar la concertación entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos, mediante la participación de los pobladores y sus organizaciones. (...).

La participación ciudadana podrá desarrollarse mediante el derecho de petición, la celebración de audiencias públicas, el ejercicio de la acción de cumplimiento, la intervención en la formulación, discusión y ejecución de los planes de ordenamiento y en los procesos de otorgamiento, modificación, suspensión o revocatoria de las licencias urbanísticas, en los términos establecidos en la ley y sus reglamentos.

El Decreto Distrital 449 de 2005, bajo cuya vigencia se inició el trámite de la revocatoria directa de la Licencia de Construcción No. LC 04 – 4 – 0861 del 30 de junio de 2004, expedida por el Curador Urbano No. 4 de Bogotá D. C., disponía expresamente en su parte motiva, que la revocatoria era procedente "... de conformidad con el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo...", norma que señala que los actos administrativos "... deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte..." (Negrillas y subrayas fuera de texto).

³ En relación con las expensas que reciben los Curadores urbanos en ejercicio de su labor, se ha indicado en reiteradas ocasiones que ellas son objeto de control fiscal.

⁴ Corte Constitucional. Sentencia C-113-99, febrero 24

⁵ Ibídem.



Continuación de la Resolución No. No 0024 09.ENE.2007

Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

El Decreto Distrital 191 de 2006, vigente desde el 8 de junio del año en curso, asignó al Departamento Administrativo de Planeación Distrital la competencia para conocer, a solicitud de parte (en el artículo 1^º) o de oficio (en el artículo 2^º), los trámites de revocatoria directa de los actos administrativos expedidos por los Curadores Urbanos de Bogotá D. C.

El párrafo del artículo primero del Decreto Distrital 449 de 2005 (sustituido por el párrafo del artículo primero del Decreto Distrital 191 de 2006), señalaba que "... Son competentes para requerir la revocatoria directa de los actos por medio de los cuales se resuelven las solicitudes de licencias urbanísticas, entre otras autoridades y personas, los titulares de las licencias, los vecinos del predio objeto de solicitud, y la Comisión de Veeduría de las Curadurías Urbanas, a través del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA, ...", norma que permite concluir la competencia de la Contraloría, para solicitar la revocación directa de la Licencia de Construcción No. 02-4-0551 del 16 de julio de 2002.

La Contraloría de Bogotá D. C. hace parte del concepto genérico "autoridad" previsto en el Decreto Distrital 449 de 2005, que la legitima en su solicitud de revocatoria, por ser uno de los organismos de control de Bogotá D. C., instituido en el Decreto Distrital 1421 de 1993, "Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá"⁶.

De tal manera que no son de recibo las argumentaciones del apoderado que aluden a la incompetencia del Contralor para solicitar la revocatoria directa de Licencias Urbanísticas, por cuanto en su condición de autoridad ejerce una labor de control posterior, fiscal, administrativo (en los términos establecidos por la Corte Constitucional en el aparte transcrito) y de gestión en aras de la defensa de la ley y la moralidad pública respecto de particulares que ejercen funciones públicas (vgr.: los Curadores Urbanos de Bogotá D. C.), fundado en los principios de eficiencia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales.

b. En cuanto a la solicitud de revocatoria directa de la Licencia de Construcción No. LC 04 – 4 – 0861 del 30 de junio de 2004, presentada por la Comisión de Veedurías a las Curadurías Urbanas de esta ciudad.

Como primera precisión, en relación con la petición de revocatoria directa de la Licencia de Construcción No. LC 04 – 4 – 0861 del 30 de junio de 2004 impetrada por la Comisión de Veedurías a las Curadurías Urbanas de esta ciudad, debe aclararse que la fecha de su presentación no corresponde con la consignada en el numeral XII de la parte considerativa de la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, ya que no fue el 30 de junio como allí se anotó, sino el 30 de mayo de 2006, bajo el número DAPD 1 – 2006 – 18155, como se indica en la radicación electrónica realizada en el momento de su recepción.

⁶ "Artículo 1- De la Revocatoria Directa a solicitud de parte. Asignar al Departamento Administrativo de Planeación Distrital D.A.P.D., la función de conocer, tramitar y resolver las solicitudes de revocatoria directa, de los actos administrativos mediante los cuales los curadores urbanos de Bogotá D.C. otorguen o nieguen licencias urbanísticas. ..."

⁷ "Artículo 2- De la Revocatoria Directa de oficio. Asignar al Departamento Administrativo de Planeación Distrital D.A.P.D., la competencia para conocer, tramitar y resolver de oficio la revocatoria directa de los actos administrativos mediante los cuales los curadores urbanos de Bogotá D.C. otorguen o nieguen licencias urbanísticas."

⁸ Artículos 45 y siguientes.



Continuación de la Resolución No. No 0024 09 ENE. 2007

Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

Efectuada la anterior precisión, en relación con la solicitud de la Comisión de Veedurías a las Curadurías Urbanas, el apoderado expresa que el DAPD no dio "... la oportunidad de controvertir o poder ejercer el derecho de defensa...", toda vez que mediante el Auto del 24 de marzo de 2006 expedido por la Subdirección Jurídica expresó tan solo, que, "... la presente actuación se inició a petición del Contralor Distrital. En este Auto únicamente se convocó a mi representada para que hiciera valer sus derechos respecto de la petición del Contralor, sin que jamás se hubiese informado de la existencia de otra petición, como tampoco se hubiese iniciado actuación oficiosa por parte del Departamento Administrativo de Planeación Distrital.". argumento respecto del que es pertinente indicar:

i. El Auto "Por el cual se da inicio al trámite de Revocatoria Directa presentada por el **CONTRALOR DE BOGOTÁ D. C.**, contra la Licencia de Construcción No. 04 - 4 - 0861 del 30 de junio de 2004, expedida por el Curador Urbano No. 4 de Bogotá D. C.", del 24 de marzo de 2006, expedido por la Subdirección Jurídica del DAPD, no hizo mención alguna al escrito de la Comisión de Veedurías a las Curadurías Urbanas, toda vez que este fue radicado 2 meses y 6 días calendario después de haberse expedido el Auto en comento, siendo ésta la razón obvia por la que en él no se relacionó esa solicitud.

ii. Frente a la solicitud de revocatoria elevada por la Comisión de Veedurías a las Curadurías Urbanas, esta Entidad siempre garantizó y privilegió el debido proceso dentro de la actuación administrativa que derivó en la expedición de la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, así:

- Permitiendo el permanente acceso al expediente a los dos apoderados que hicieron parte dentro del trámite, doctores **EFRAÍN FORERO MOLINA** y **ALFONSO VALDIVIESO SARMIENTO**, quien reemplazó al primero, mediante poder otorgado por el señor **ALFONSO GARCÍA GALVIS** Representante Legal de la Sociedad Altos de Belmonte I, radicado en el DAPD con el número 1 - 2006 - 22254, el 29 de junio de 2006.

- En la fecha en que se notificó al DAPD el cambio de apoderado de la sociedad Altos de Belmonte I, el doctor **VALDIVIESO** radicó escrito en el que requirió: "... me permito reiterar la solicitud de expedición de copias pedidas en el escrito radicado ante ese departamento con el número 1 - 2006 - 21273 del 21 de junio de 2005⁹..." (Pie de página fuera de texto), copias que fueron expedidas al solicitante y que al comprender la totalidad del expediente, incluía el escrito contentivo de la solicitud de revocatoria directa de la Licencia de Construcción No. LC 04 - 4 - 0861 del 30 de junio de 2004 realizada por la Comisión de Veedurías a las Curadurías Urbanas de esta ciudad.

- Sorprende que el apoderado manifieste ahora que por no contener el Auto que dio inicio al trámite, mención alguna sobre la solicitud de revocatoria directa presentada por la Comisión de

⁹ Escrito radicado 8 días antes (21 de junio de 2006), en el que el señor **ALFONSO GARCÍA GALVIS** Representante Legal de la sociedad Altos de Belmonte I Ltda., solicita en lo pertinente "... se expida a mi costa y cargo de la totalidad del expediente objeto de la presente solicitud, la cual cancelaremos en el momento en que sea indicado."



Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

Veedurías a las Curadurías Urbanas (por física imposibilidad temporal), se violentó el debido proceso dentro del trámite de revocatoria que derivó en la expedición de la Resolución No. 00953, no solo porque al tener copia integral del expediente conocía de la petición elevada por la Comisión de Veedurías a las Curadurías Urbanas, sino por que posterior a ello tuvo acceso al expediente, producto de varias visitas realizadas a la Subdirección Jurídica de esta Entidad, donde además de ser escuchado por los servidores públicos encargados del trámite, analizó y revisó el expediente cuando así lo requirió y por el tiempo que consideró pertinente¹⁰.

iii. Además de las razones anteriores, es claro que en el trámite que derivó en la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006 expedida por el DAPD, no se configuró **“... una violación directa y flagrante del derecho fundamental al debido proceso que tiene mi representada, como lo consagra el artículo 29 de la Constitución Política.”**, en la medida que siempre se garantizó el procedimiento consagrado en el artículo 74 del Código Contencioso Administrativo, así:

- Expedición de Auto *“Por el cual se da inicio al trámite de Revocatoria Directa presentada por el CONTRALOR DE BOGOTÁ D. C., contra la Licencia de Construcción No. 04 – 4 – 0861 del 30 de junio de 2004, expedida por el Curador Urbano No. 4 de Bogotá D. C.”*, del 24 de marzo de 2006, en el que se resolvió convocar al interesado o titular de la citada Licencia para que se hiciera parte en el trámite e hiciera valer sus derechos. Igualmente se ordenó remitir el expediente a la Subdirección de Planeamiento Urbano con el fin de solicitarle los antecedentes y estudios existentes respecto de la mencionada Licencia de Construcción y si era del caso, realizara el examen técnico del expediente.

- Expedición del Auto del 29 de junio de 2006, en el que la Subdirección Jurídica resolvió reconocer personería jurídica para actuar al doctor **ALFONSO VALDIVIESO SARMIENTO**, negar la solicitud de nulidad y/o revocatoria parcial del trámite de revocatoria directa, correr traslado al apoderado del concepto técnico 1 – 2006 – 03570 del 13 de junio de 2006 expedido por la Subdirección de Planeamiento Urbano, negar la prueba consistente en oficiar a la Dirección de Impuestos Distritales de la Secretaría de Hacienda con el fin de que certificara los pagos realizados por concepto de impuesto predial, comunicar que la Subdirección de Planeamiento Urbano en el concepto técnico 3 – 2006 – 03570 del 13 de junio de 2006 ya había determinado las normas de edificabilidad, usos y afectaciones que debieron haberse previsto en relación con el predio objeto de dicho acto administrativo, así como las que se encontraban vigentes previo a la expedición de la UPZ Refugio/Chicó-Lago y, ordenar a la Curaduría Urbana No. 4 el envío del expediente administrativo No. 01 – 4 – 2059.

- Expedición del Auto del 31 de julio de 2006, por el cual esta Entidad dispuso anexar al expediente prueba de la publicación de la Licencia de Construcción No. LC 04 – 4 – 0861 del 30 de junio de 2004 y se solicitó concepto técnico a la Subdirección de Planeamiento Urbano del

¹⁰ En varias ocasiones, el doctor **ALFONSO VALDIVIESO SARMIENTO**, acudió a la Subdirección Jurídica del DAPD, siendo atendido, por **JORGE ENRIQUE RAMÍREZ HERNÁNDEZ** abogado de la Subdirección, así como por **CLARA DEL PILAR GINER GARCÍA** Gerente de Trámites Administrativos, donde además de ser escuchado, tuvo la oportunidad de revisar el expediente en su totalidad.



Continuación de la Resolución No. No 002409 ENE. 2007

Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

DAPD.

- Expedición del memorando 3 – 2006 – 04883 del 4 de agosto de 2006, mediante el que la Subdirección Jurídica dio traslado a la Subdirección de Planeamiento Urbano, del escrito del apoderado, en el que se opuso a las conclusiones a las que llegó esa Subdirección en el concepto técnico, con el fin de que se pronunciara sobre los argumentos técnicos allí contenidos.

- Expedición del concepto técnico de respuesta a las objeciones presentadas por el apoderado, del 12 de septiembre de 2006, en el que la Subdirección de Planeamiento Urbano se pronunció sobre los "... comentarios y observaciones del concepto técnico emitido por esta Subdirección...", realizados por el apoderado.

Para terminar, debe aclararse que cuando en la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, se expresó "... *Procede este Despacho a resolver la solicitud de revocatoria directa presentada por el Contralor Distrital, y coadyuvada por la Comisión de Veeduría a las Curadurías Urbanas, respecto de la Licencia de Construcción No. LC 04 – 4 – 0861 del 30 de junio de 2004, expedida por el Curador Urbano No. 4 de esta ciudad,...*" (Negritas y subrayas fuera de texto), único aparte en el que en ese acto administrativo se habla de coadyuvar, **no** buscaba, como lo afirma el impugnante, "enmendar la falta de competencia que tenía el Contralor Distrital para presentar la solicitud de revocatoria Directa" (Sic), en la medida que a lo largo de todo el escrito se deja claro que la Comisión de Veedurías a las Curadurías Urbanas presentó una solicitud independiente, tendiente también a obtener la revocatoria directa de la Licencia de Construcción No. LC 04 – 4 – 0861 del 30 de junio de 2004 expedida por el Curador urbano No. 4 de Bogotá D. C., y que cuando en ese aparte se habla de coadyuvancia, se toma en el sentido literal de la palabra, esto es, "Contribuir, asistir o ayudar a la consecución de algo"¹¹. Además su trámite de manera conjunta con la solicitud del Contralor, obedeció al acatamiento del principio de economía previsto en el artículo 3º del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 29 del mismo ordenamiento.

c. En cuanto al conocimiento oficioso del trámite de revocatoria directa de la Licencia de Construcción No. LC 04 – 4 – 0861 del 30 de junio de 2004 expedida por el Curador Urbano No. 4 de esta ciudad.

Este Despacho encuentra que las conclusiones del apoderado en relación con las afirmaciones realizadas en la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, alusivas a la competencia oficiosa del DAPD para tramitar la revocatoria directa de licencias urbanísticas con fundamento en el Decreto Distrital 191 de 2006, carecen de fundamento y son contrarias a la literalidad de lo consignado en esa providencia. En efecto, no es cierto que al hacerse referencia a dicha atribución se estuviese enmendando la falta de competencia del Contralor Distrital para solicitarla, ya que en el último párrafo del literal c, numeral 1 de los RAZONAMIENTOS DEL DESPACHO, lo que se expresa es, que no obstante la claridad que se tiene sobre tal

¹¹ www.rae.es



Continuación de la Resolución No. No 0024 09 ENE. 2007

Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

competencia en cabeza del Contralor, las argumentaciones en contrario por parte del titular de la licencia a través de su apoderado, resultaban irrelevantes dada no sólo la existencia de otra solicitud en el mismo sentido por parte de la Comisión de Veedurías a las Curadurías Urbanas, sino también, y para redundar en mayores fundamentos, en la atribución oficiosa conferida a la Entidad a través del citado Decreto 191 de 2006, en su condición de superior funcional, conforme así se pronunció el Consejo de Estado a través del concepto radicado con el número 1643 del 2 de junio de 2005.

2.2. En cuanto al numeral 2 del capítulo I., del escrito de reposición, denominado “En cuanto a los errores de hecho en que supuestamente se incurrió dentro del trámite que dio lugar a la expedición de la Licencia de construcción No. LC 04 – 4 – 0861 del 30 de junio de 2004.”.

En los “**ARGUMENTOS DE LA DEFENSA**”, relacionados con las remisiones jurisprudenciales que en la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006 se hacen en relación con las clases de error de hecho expresadas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el apoderado manifiesta:

*“Respecto de los argumentos expuestos por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital es preciso aclarar que el **error de hecho** al que hace referencia la Directora del Departamento Administrativo de Planeación Distrital para sustentar la revocatoria de la Licencia de Construcción, es aquel que se establece como causal de casación de las sentencias dictadas por los jueces penales previsto en el numeral primero del Artículo 207 del Código de Procedimiento Penal, pero nada tiene que ver con el error derivado de medios ilegales o maniobras fraudulentas que vician la voluntad de la administración para la expedición de actos administrativos y que permite su revocatoria directa sin consentimiento del titular. ... La Resolución acoge en el numeral 3, pag 59, las clases de error de hecho que se mencionan en la **Sentencia de Casación Penal** de la Corte Suprema de Justicia con ponencia del Dr. Alvaro Pérez Pinzón, las cuales precisamente se refieren a los errores que sustentan la viabilidad de este recurso extraordinario, **pero no se analiza el error de hecho que vicie la voluntad de la administración para expedir actos administrativos. ...**”.*

Sobre tales manifestaciones es pertinente indicar:

i. La clasificación en cuanto al error de hecho, realizada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, si bien es cierto, refiere a la primera causal del artículo 207¹² de la Ley 600 de 2000, anterior Código de Procedimiento Penal, sustituido por lo previsto en la

¹² “Artículo 207. Causales. En materia penal la casación procede por los siguientes motivos: ... 1. Cuando la sentencia sea violatoria de una norma de derecho sustancial. Si la violación de la norma sustancial proviene de error de hecho o de derecho en la apreciación de determinada prueba, es necesario que así lo alegue el demandante. ... 2. Cuando la sentencia no esté en consonancia con los cargos formulados en la resolución de acusación. ... 3. Cuando la sentencia se haya dictado en un juicio viciado de nulidad.” (Negrillas y subrayas fuera de texto)



Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

tercera causal del artículo 181¹³ del actual Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), no es menos cierto, que su contenido se ocupa del error de hecho como vicio de la voluntad del juez penal al momento de proferir sentencia en lo atinente a la "contemplación objetiva de la prueba"¹⁴, y que permite señalar para todos los efectos, a partir de una clasificación¹⁵, cuándo, un error de un servidor público (en el caso de la jurisprudencia, en sede jurisdiccional; en el sub examine, en sede administrativa), vicia la voluntad.

ii. La anterior clasificación prevista para el campo penal, también es utilizada (con variaciones semánticas) en materia civil, área del derecho donde se desarrolla el concepto "vicios del consentimiento", entendidos ellos, como error, fuerza y dolo, y a partir de la cual, se trasladan al campo de las actuaciones administrativas bajo el concepto genérico de vicios de la voluntad, tal como se indicó en la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006. En efecto, en el área civil, la Jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia señala:

"(...)

1) ERROR DE HECHO Y DE DERECHO: "En el primer tipo de error se incurre cuando se desacierta en la contemplación objetiva de la prueba, bien porque se supone el medio inexistente, se pretermite el existente o se le da una interpretación ostensiblemente contraria a su contenido objetivo, alterándolo.

(...)"¹⁶

"(...)

1) ERROR DE HECHO -Modalidades: "El error de hecho 'aparece cuando el juez tiene por demostrado un acontecimiento con base en una prueba que, en realidad, no obra dentro del proceso (error por suposición). O cuando el juez niega la existencia del hecho, no obstante haberse incorporado al proceso la prueba tendiente a establecerlo (error por preterición). Variante de la primera forma de error es aquella que se da cuando el juez le hace decir a un determinado medio probatorio lo que éste, de hecho, no representa (suposición por adición). Y la segunda es advertible cuando el juez, sin ignorar la existencia del medio probatorio, recorta o mutila su contenido (preterición por cercenamiento)'. ...".

¹³ "Artículo 181. Procedencia. El recurso como control constitucional y legal procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados por delitos, cuando afectan derechos o garantías fundamentales por: ... 1. Falta de aplicación, interpretación errónea, o aplicación indebida de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal, llamada a regular el caso. ... 2. Desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de la garantía debida a cualquiera de las partes. ... 3. El manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia. ... 4. Cuando la casación tenga por objeto únicamente lo referente a la reparación integral decretada en la providencia que resuelva el incidente, deberá tener como fundamento las causales y la cuantía establecidas en las normas que regulan la casación civil." (Negrillas y subrayas fuera de texto)

¹⁴ Magistrado: JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ GÓMEZ - SALA DE CASACIÓN CIVIL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Número de Radicación: 4981

¹⁵ Metodológicamente, las clasificaciones, son maneras de mejor explicar y entender un fenómeno objeto de análisis.

¹⁶ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA - Magistrado Ponente: Dr. JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ GÓMEZ - Santafé de Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999) - Referencia: Expediente No. 4981



Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

(...)^{m7}

iii. Contrario a las apreciaciones expuestas por el apoderado, el análisis de los errores evidenciados y probados en la actuación administrativa que derivó en la expedición de la Licencia de Construcción No. LC 04 – 4 – 0861 del 30 de junio de 2004, se efectúa en la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006 luego de haberse verificado los “... medios ilegales o maniobras fraudulentas”¹⁸, que se relacionan detalladamente en el acápite Razonamientos del Despacho – numeral 3¹⁹ – literales b. a e²⁰.

2.3. En cuanto al numeral 2.1., del capítulo I., del escrito de reposición, denominado “Primer argumento tanto del “error de hecho por falso juicio de existencia en la modalidad falsa apreciación de la prueba” como del “error de hecho por falso juicio de existencia en la modalidad falta de apreciación de la prueba”.

a. Razones de la defensa, en cuanto a la persona que presentó “... la solicitud de licencia de construcción ante la Curaduría Urbana No. 4 de Bogotá el 18 de julio de 2002...”.

En relación con este punto, el apoderado expresa que “... de acuerdo con una revisión juiciosa del expediente, **la Sociedad ALTOS DE BELMONTE I., no fue la que presentó la solicitud de licencia de construcción ante la Curaduría Urbana No. 4 de Bogotá el 18 de julio de 2002.** Quienes presentaron dicha solicitud fueron los propietarios que para la época eran los dueños de los predios objeto de la misma, vale decir las Sociedades **INVERSIONES MONTERREY LTDA, PAYAN SCHENEIDER LTDA, INEGO LTDA y la señora FLORENCIA BORRERO. ...**”.

La anterior afirmación contradice flagrantemente lo indicado en el concepto suscrito por el doctor **LIBARDO RODRIGUEZ** respecto del que el apoderado en su comunicación del 31 de julio de 2006 con número de radicación DAPD 1 – 2006 – 26697 (en los que realiza la defensa dentro de la actuación administrativa que derivó en la Resolución recurrida), solicita “... **sea tenido en cuenta como argumentos de la defensa**...”, y que además transcribe en dicho escrito (página 9), en donde se indica que esa situación se debió a “... **una distracción de la tramitadora, explicable porque ya en ese momento estaba en proyecto la constitución**”.

¹⁷ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA - Magistrado Ponente: Dr. NICOLAS BECHARA SIMANCAS - Santafé de Bogotá, D.C., veintinueve (29) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999) - Referencia: Expediente No. 5327

¹⁸ Se utiliza la expresión usada por el apoderado.

¹⁹ “En cuanto a la sustentación y análisis de fondo de la solicitud de revocatoria directa”.

²⁰ Literal b: En cuanto a la debida presentación de una solicitud de licencia de construcción en vigencia del Decreto Nacional 1052 de 1998. ... Literal c: En cuanto al solicitante y titular válido de una Licencia de Construcción para los predios ubicados en la Avenida carrera 1 No. 78 – 80, Carrera 3 No. 78 – 62, Carrera 3 No. 78 – 52 y Carrera 1 E No. 78 – 91, en la fecha en que se radicó la solicitud que derivó en la expedición de la Licencia de Construcción No. 04 – 4 – 0861 del 30 de junio de 2006. ... Literal d: En cuanto a los señalamientos sobre la ocurrencia de un desglose de documentos del expediente 01 – 4 – 2059 al expediente 02 – 4 – 0896, sobre la fecha cierta la presentación en debida forma de la solicitud dentro del último de los expedientes y su relevancia jurídica en el trámite de revocatoria. ... Literal e: En cuanto al escrito de requerimiento del 13 de agosto de 2002, la comunicación del 9 de junio de 2003 y la Resolución No. 03 – 4 – 0485 del 9 de septiembre de 2003 y sus efectos jurídicos.



Continuación de la Resolución No. No 002409 ENE. 2007

Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

"Altos de Belmonte I Ltda."... Este fundamento de la defensa dentro del trámite de revocatoria iniciado por el DAPD y que a propósito del recurso de reposición ahora se modifica, en el parecer de este Despacho, obedece al hecho simple de que en la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, se demostró que la *"distracción de la tramitadora"* ocurrida el día 18 de julio de 2002 era de imposible ocurrencia, en la medida que ella consistió en saber el nombre y NIT de una persona jurídica que no había sido constituida (Altos de Belmonte I) y el número del folio de matrícula inmobiliaria de un predio englobado respecto del que no se había otorgado para esa fecha ni la escritura pública, ni mucho menos se había inscrito ni obtenido el número de matrícula inmobiliaria. Situación que se indica en la Resolución impugnada, debe ser puesta en conocimiento de las autoridades jurisdiccionales pertinentes para que ellas en el ejercicio de sus competencias determinen si las actuaciones claramente ilegales que allí se evidenciaron al momento de diligenciar un documento público, deben ser objeto de reproche judicial.

Pese a lo anterior, este Despacho procede a pronunciarse de fondo sobre los argumentos que expresa el apoderado a partir del razonamiento transcrito (del que se insiste, es una nueva postura de la defensa en relación con el momento en que se diligenció total y correctamente el formulario único de solicitud):

i. ***"La sociedad ALTOS DE BELMONTE I LTDA se convirtió en cesionaria de la solicitud de licencia que estaba en curso, lo cual es perfectamente consistente con la evolución del trámite pues los hechos mencionados ocurrieron con posterioridad a la presentación de la solicitud pero antes de haberse expedido la Licencia de Construcción No. 04 - 4 - 0861 del 30 de junio de 2004."***

En relación con este aspecto, es pertinente transcribir lo señalado por este Despacho en la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006:

"(...)

Tal como lo indica el primer apoderado de la Sociedad ALTOS DE BELMONTE I, cuando se pregunta: "... O acaso, ¿en la mitad de un trámite no pude (Sic) ser cambiado el titular de la licencia por otro, o un profesional responsable o (Sic) por otro, o un constructor responsable por otro, o no se puede vender un proyecto en la mitad de un proceso administrativo? ...", es claro que ello puede ocurrir dentro de los términos para surtir el trámite, de manera formal, y aportando con anterioridad al cambio de titular, los documentos idóneos que lo soporten, y no como en el caso objeto de debate, donde se diligencia el formulario con el nombre de un titular (Sociedad Altos de Belmonte I) en ese momento inexistente y respecto de un predio que para el momento que dio inicio el trámite, no existía jurídicamente.

(...)"(Negritas y subrayas fuera de texto)

ii. ***"... durante el trámite se procedió a actualizar la información llenando un nuevo formulario de solicitud, con los nuevos datos que se allegaron al proceso"²¹ ... Así las***

²¹ Afirmación contenida en la página 19 del escrito de reposición.



Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

cosas, conociendo el Curador Urbano No. 4 que durante el trámite los predios se habían englobado.... Por esta razón, lo que hizo fue diligenciar un nuevo formulario de solicitud de licencia con los datos actualizados... manteniendo los datos que no se habían modificado, entre otras razones porque así lo había pedido el Arquitecto Alejandro Ardila en su comunicación del 13 de agosto de 2002 (folio 95). Como consecuencia de las mencionadas circunstancias, en el formulario CU – 008272 se mantuvieron los datos que no habían cambiado, entre los cuales estaba la fecha de la radicación de la solicitud de licencia y se incluyeron los nuevos datos del propietario incluido su NIT, del folio del englobe de los predios... y el nombre de la apoderada o encargada del trámite señora Luz Marina Calderón.²²”(Pies de página fuera de texto).

En relación con estas nuevas explicaciones y afirmaciones del apoderado, y conforme al expediente administrativo 02 – 4 – 0896 de la Curaduría Urbana No. 4, la única evidencia que obra en relación con el formulario de solicitud (folios 1 a 3) es el radicado el 18 de julio de 2002 con el número 02-4-0896, sin que exista ninguna constancia de haberse diligenciado uno nuevo, ni solicitud de inclusión de “datos actualizados”. Al respecto resulta pertinente hacer las siguientes apreciaciones:

- Si tal como lo afirma el apoderado, se diligenció un nuevo formato sin dejar expresa constancia de ello, tal actuación reñiría contra el deber ser de una actuación ajustada a la ley, en la medida que pese a que dentro del trámite 02 – 4 – 0896 el solicitante y/o el Curador Urbano tenían derecho a modificar los datos inicialmente registrados con el objeto de “actualizar la información” (siempre dentro de los términos y con las consecuencia jurídicas que tal actuación implicara), era necesario hacerlo explícito con la finalidad de que la documental contenida en el expediente, se ajustara a la realidad de las actuaciones que dentro del trámite se estaban surtiendo, y no precisamente para extender irregularmente en el tiempo un procedimiento respecto del cual las disposiciones legales tenían establecidos unas etapas y términos perentorios, en orden a dar cabal aplicación al régimen de transición.

- La página 1 del Formulario de Solicitud Trámites (folio 3) del expediente administrativo 02 – 4 – 0896, corresponde al formato fechado el día 18 de julio de 2002, tal como se concluye de la radicación donde aparece consignada esa fecha en la casilla prevista para el efecto (parte superior derecha), no encontrando ninguna justificación para afirmar que ello se debió a que en el “nuevo formulario”, se registró el mismo número y fecha para dejar constancia del momento en que se radicó inicialmente el trámite, se insiste, por no haber soporte documental alguno que indique expresa o tácitamente que ello ocurrió; manifestación que al carecer de prueba deja lo alegado por el apoderado, en el ámbito de las especulaciones y porque en estricta lógica y actuando en derecho, de haberse reemplazado el primer formulario por otro, lo lícito no era anotar en el nuevo formato la fecha de radicación inicial, sino la de la nueva data, conservando el primer formulario con el fin de dejar constancia documental del momento de la radicación, así como de los demás datos allí incorporados.

²² Afirmación contenida en la página 22 del escrito de reposición.



-Continuación de la Resolución No. No 0024 09 ENE. 2007

Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

- Revisada la página 2 del formulario de solicitud que obra en el expediente 02 – 4 – 0896, se encontró que no corresponde a una secuencia de la página número 1 que dentro del formulario único de solicitud tiene diligenciado el espacio previsto para la fecha y el consecutivo (número de expediente), conforme a los siguientes hechos verificables de la simple observación del documento: i. La hoja 2 no corresponde al modelo de formato de las hojas 1 y 3 de la solicitud, ii. La letra preimpresa de la hoja 2 no guarda correspondencia con la de las hojas 1 y 3 de la solicitud, iii. No existe secuencia entre la numeración de la información preimpresa de la hoja 1 con la de la hoja 2, puesto que el último numeral de la página 1 del formulario es el **numeral 4** correspondiente a "TITULARES"²³, mientras que el primer numeral de la página 2 de la solicitud inicia en el **numeral 7** correspondiente a "ANTECEDENTES DE LA EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN" y, iv. La página 2 de la solicitud, a diferencia de las hojas 1 y 3, tiene en la parte superior derecha el número preimpreso CU – 008272, número del que carecen las hojas 1 y 3.

- Revisada la página 3 del formulario de solicitud que obra en el expediente 02 – 4 – 0896, se encontró que no corresponde al modelo de formato ni de la hoja 1 ni de la 2 de la solicitud, conforme a los siguientes hechos verificables de la simple observación del documento: i. La letra preimpresa de la hoja 3 no guarda correspondencia con la de las hojas 1 y 2 de la solicitud, ii. No existe secuencia entre la numeración de la información preimpresa de la hoja 2 con el de la hoja 3, puesto que aquella termina con un subtítulo sin numeral ni literal alguno denominado "**OBSERVACIONES DEL INTERESADO**" precedido del numeral 1.2., correspondiente a "ESTRUCTURAS", en tanto que esta última inicia con el literal E. ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN" seguido del literal F. donde nuevamente se repite "**OBSERVACIONES DEL INTERESADO**"²⁴, iii. En la hoja 1 del formulario de solicitud que aparece en el expediente existe un espacio previsto para la localización del predio no utilizado para esos efectos y en su lugar a manuscrito remite a la hoja 3 donde figura un espacio denominado "ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN". v. Solamente en el margen derecho de la hoja 3, aparecen los datos referentes al autor de la diagramación de esa hoja: "DIAGRAMACIÓN POR JACKROM jackrom75@curaduria4.com".

Producto del anterior análisis, es fácil concluir que con la variación en la argumentación ahora expuesta, que no lo fue en la defensa inicial, se pretende dar visos de legalidad a una supuesta modificación en el formulario radicado el 18 de julio de 2002, que no corresponde con el deber ser de una actuación ajustada a derecho, y que como consecuencia de estar desagregado en varios folios no podía ser reemplazado parcialmente para consignar datos que no correspondían con la realidad existente en la fecha de radicación y las otras muy diferentes circunstancias que allí se consignaron y que es evidente sucedieron mucho tiempo después.

Ahora bien, si en gracia de discusión se admitiera la excusa presentada en el memorial que sustenta el recurso, relativa al diligenciamiento de un nuevo formulario, realmente lo que resulta es una actuación contraria a la *sindéresis* jurídica, pues al pretender justificar una situación de

²³ Que se desagrega en el literal a, correspondiente a "titulares de la licencia", en el literal b, correspondiente a "profesionales responsable", en el literal c "dirección correspondencia titular" y, en el literal d "encargado del trámite"

²⁴ Nótese que la parte final de la hoja 2 del formulario de solicitud sub *exámne* prevé un espacio exactamente para lo mismo.



Continuación de la Resolución No. No 0024 09-ENE. 2007

Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

esa irregular magnitud, lo que pone en evidencia es la configuración de medios ilícitos determinantes en el otorgamiento de la licencia, con la iniciación de un trámite cuya información fáctica no existía en la fecha de radicación, o con su extensión en el tiempo para hacerse acreedor a un régimen de transición que ya no le era aplicable por haber entrado a regir la UPZ El Refugio/Chicó-Lago.

iii. *"En el presente caso, lo sucedido señala que dentro del proceso de depuración del expediente verificado por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital "mediante visita realizada por funcionarios del DAPD en fecha noviembre 10 de 2004" según se lee ... en Acta No. 002 del 31 de agosto de 2005, se eliminaron -entre otros documentos- el formulario de solicitud de licencia inicialmente presentada, pues la Guía No. 2 señala que dentro del proceso de "depuración" se eliminan las copias duplicadas o borradores que estuvieran en el mismo expediente. Y en el trámite que convoca nuestra atención, por las razones varias veces expresadas, existían dos formularios de solicitud de licencia a saber: 1) El presentado el 18 de julio de 2002 por parte de los cuatro propietarios de la época en que los predios pertenecían a titulares distintos y 2) El que contenía los datos actualizados del solicitante del englobe y de la apoderada consignados en el formulario NO. CU - 008272."*

Las anteriores afirmaciones parten del supuesto de que dentro de la actuación administrativa 02 - 4 - 0896 surtida en la Curaduría Urbana No. 4 de esta ciudad, el formulario inicialmente presentado el 18 de julio de 2002 fue reemplazado íntegramente por otro. Al respecto se precisa aclarar:

- Revisada el Acta No. 002 del 31 de agosto de 2005, no existe ninguna evidencia, ni tácita ni expresa, que permita señalar objetivamente que dentro del expediente 02 - 4 - 0896 se eliminó documento alguno, toda vez que en el único aparte de dicho documento donde se infiere expresamente que hubo una depuración, se hace relación a la documentación de la totalidad de las licencias de urbanismo y construcción unificadas por predio y ejecutoriadas entre el 1º de julio de 2004 y el 31 de diciembre de 2004.

- La Guía No. 2 denominada "Instructivos archivísticos para la organización de la documentación que conforman los expedientes de predios de las Curadurías y que serán transferidos al DAPD", en materia de las actuaciones denominadas genéricamente "Depuración y expurgo", expresa:

"(...)

Depuración: Se entiende por tal la eliminación de copias duplicadas dentro del mismo expediente, borradores. Se aclara que los mencionados internos que contengan un concepto técnico deberán permanecer en el expediente.

Expurgo: Consiste en eliminar cualquier documento que no tenga relación con los expedientes (revistas, post-it, sobres, planillas de correo).



Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

(...)"

- Conforme a la definición de depuración, es claro que un formulario de solicitud de licencia de construcción radicado al inicio de un trámite, que hubiese sido reemplazado por otro, en atención a cambios como "... los nuevos datos del propietario incluido su NIT, del folio del englobe de los predios... y el nombre de la apoderada o encargada del trámite señora Luz Marina Calderón...", no puede considerarse una copia duplicada, precisamente por tener información diferente al nuevo formato, no pudiéndose aceptar por tanto, que en aras de una "depuración" se haya eliminado del expediente administrativo.

- Tampoco puede señalarse que el hipotético planteado por el apoderado, referente a la existencia de dos formularios dentro del trámite, haya dado lugar al expurgo del primero, toda vez que dicho documento, tenía relación directa con la actuación y era esencial dentro de la misma.

Todas las situaciones hasta aquí relacionadas, demuestran y confirman lo expuesto en la decisión recurrida, en cuanto a que el día de la radicación de la solicitud, el titular del predio objeto de la petición era una persona inexistente²⁵ y el inmueble del que se solicitaba la licencia no era un solo globo de terreno jurídicamente hablando²⁶, irregularidades que fueron demostradas de manera fehaciente no solo en la Resolución impugnada sino en el presente acto administrativo independientemente de que el apoderado las califique como "una afirmación no solo falsa sino ridícula e ingenua".

b. Razones de la defensa, en cuanto al poder que se le otorgó a la Arquitecta LUZ MARINA CALDERÓN, persona que presentó "... la solicitud de licencia de construcción ante la Curaduría Urbana No. 4 de Bogotá el 18 de julio de 2002..."

Frente a los argumentos en los que el apoderado justifica su razonamiento, debe indicarse:

i. "... la arquitecta no era la apoderada de la Sociedad ALTOS DE BELMONTE I LTDA desde el inicio del trámite sino que asumió este mandato en representación de la nueva propietaria en el transcurso del proceso administrativo... (el 12 de noviembre de 2003)".

²⁵ En la página 47 de la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, se indica: "... La Sociedad **ALTOS DE BELMONTE I**, fue constituida mediante Escritura Pública No. 1316 del 13 de mayo de 2003, otorgada ante el Notario Treinta y Seis del Círculo de Bogotá, esto es **NUEVE (9) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS** luego de realizada la solicitud de licencia de construcción; y fue inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, el día 4 de junio de 2003, esto es **DIEZ (10) MESES Y DIECISEIS (16) DÍAS**, después de radicada la solicitud en mención..."

²⁶ En la página 47 de la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, se indica: "... Los predios de la Avenida carrera 1 No. 78 - 80, Carrera 3 No. 78 - 62, Carrera 3 No. 78 - 52 y Carrera 1 E No. 78 - 91, objeto de la solicitud de licencia de construcción, realizada mediante el Formulario Único de Construcción No. CU - 008272, el 18 de julio de 2002, fueron englobados y transferido su dominio a la **SOCIEDAD ALTOS DE BELMONTE I**, mediante la Escritura Pública No. 1316 del 13 de mayo de 2003, otorgada ante el Notario Treinta y Seis del Círculo de Bogotá²⁵, esto es **NUEVE (9) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS**, luego de realizada la solicitud de licencia de construcción para esos predios, pero dicho englobe surtió efectos jurídicos y pasaron a ser parte de la Sociedad **ALTOS DE BELMONTE I**, el 20 de junio de 2003, esto es, **ONCE (11) MESES Y DOS (2) DÍAS** después de efectuada tal solicitud, fecha en que se abre el folio de matrícula inmobiliaria con el englobe de los predios (50 C - 1575182) dándole la titularidad del derecho real de dominio a la sociedad en cita."



Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

A propósito de esta afirmación es necesario anotar que el poder otorgado por la sociedad Altos de Belmonte I, a la señora Luz Marina Calderón de Vergnaud, fue objeto de presentación personal por parte de Alfonso García Galvis, el día 13 de noviembre de 2003 (y no el 12 de noviembre de ese año, como lo expresa el apoderado), fecha desde la que se observa, fue debidamente otorgado.

Efectuada la anterior precisión, la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expresa y coincide que desde el 13 de noviembre de 2003 la señora Calderón *"asumió el mandato en representación de la nueva propietaria"*, esto es, de Altos de Belmonte I, así:

- En el literal i, numeral 2 de los Razonamientos del Despacho (páginas 37 y 38).
- En el tercer párrafo de la página 47²⁷ (punto iv, literal c, numeral 3 de los Razonamientos del Despacho).
- En el primer párrafo de la página 49 (punto iv, literal c, numeral 3 de los Razonamientos del Despacho).

Afirmación que permite señalar con toda claridad que ninguna actuación anterior al 13 de noviembre de 2003, realizada por la señora **LUZ MARINA CALDERÓN DE VERGNAUD**, era válida, al no estar legitimada en la causa por carencia de poder para actuar. Por tanto, al no ser solicitante válida conforme a lo señalado en el artículo 9²⁸ del Decreto Nacional 1052 de 1998, no podía entenderse que con antelación al 13 de noviembre de 2003, la radicación se hubiese efectuado en debida forma y si ello ocurrió sin el respectivo poder para actuar, esa condición de la "debida forma" exigida en la norma sólo pudo haberse dado cuando la apoderada adquirió legitimidad para fungir como tal. Ese momento, es el propio apoderado quien reconoce ocurrió el 12 (sic) de noviembre de 2003, fecha en la que ya había sido expedido el Decreto Distrital 075 del 20 de marzo de 2003 – UPZ El Refugio/Chicó – Lago, y en consecuencia, era esta la norma que debió aplicarse al predio y no el Acuerdo 6 de 1990 y sus decretos reglamentarios, como en efecto lo hizo el Curador No 4 al amparo de un régimen de transición al que no se tenía derecho, no solo por la razón precedente sino por las contenidas en la Resolución impugnada y en las que se expresarán más adelante.

ii. *"... Es importante tener en cuenta que la señora LUZ MARINA CALDERÓN con anterioridad al poder que le confirió la SOCIEDAD ALTOS DE BELMONTE I LTDA (el 12 de noviembre de 2003) ya venía desempeñándose como apoderada o encargada del trámite desde el 14 de marzo de 2002 a nombre de INVERSIONES MONTERREY(Sic) LTDA y a su vez representaba a las Sociedades INEGO LTDA Y PAYAN SCHENEIDER LTDA según se observa en la parte final de los poderes que le habían conferido los representantes*

²⁷ En cuanto a las expresiones contenidas en el aparte al que se hace referencia de la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, por un error de digitación, señala como la fecha de otorgamiento del poder el día 13 de octubre de 2003 y no el día 13 de noviembre de ese año.

²⁸ **Artículo 9°.-** *Solicitud de licencias, El estudio, trámite y expedición de licencias, se hará sólo a solicitud de quienes puedan ser titulares de las mismas...*



Continuación de la Resolución No. No 0024 D9 ENE. 2007

Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

legales de esas sociedades visibles a folios 93 y 94 del expediente 02 – 4 – 0896...”.

En relación con los argumentos transcritos, debe señalarse:

- Conforme a la prueba documental, en especial el formulario de solicitud de licencia, el que tal como se evidenció en el literal precedente fue el único que se diligenció integralmente dentro de la actuación, sin que obre ninguna prueba de haber sido reemplazado por uno posterior, aparece como solicitante - encargada del trámite, la señora **LUZ MARINA CALDERÓN DE VERGNAUD**, persona que solo hasta el día 13 de noviembre de 2003 obtuvo poder para actuar por parte del Representante Legal de la persona jurídica que en dicho documento público (se reitera radicado el 18 de julio de 2002) se relaciona como el titular de la licencia (Altos de Belmonte I), esto es, 15 meses y 25 días luego de haber radicado el trámite. Ello implicaba que las actuaciones previas por esa persona realizadas, incluida la propia presentación de la solicitud, carecieran de legitimación en la causa de acuerdo a lo así señalado en el tercer párrafo de la página 47 de la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, lo que generaba para el Curador Urbano No. 4, como única alternativa, el rechazo de la solicitud.

Sin embargo, y toda vez que el apoderado en el escrito de reposición se aparta de la conclusión a la que llega el doctor **LIBARDO RODRÍGUEZ** respecto de la que él mismo solicitó fuera tenida en cuenta como argumentos de la defensa, y ahora plantea que la información que contiene el formulario, recoge datos que solo pudieron ser obtenidos muchos meses después de radicada la solicitud, en razón a que ese documento es uno diferente al del 18 de julio de 2002, es procedente entrar a analizar tal como se hizo en la Resolución impugnada si en ese nuevo escenario, la señora **LUZ MARINA CALDERÓN** podía actuar legítimamente dentro del trámite y las implicaciones jurídicas de ello:

- El apoderado manifiesta que la señora **CALDERÓN** “... *ya venía desempeñándose como apoderada o encargada del trámite desde el 14 de marzo de 2002 a nombre de INVERSIONES MONTERREY(Sic) LTDA...*”, hecho que no es cierto por las razones que se expresaron en la página 47 de la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006:

“(...)”

- Debe señalarse que dentro del expediente 01 – 4 – 2059 de la Curaduría Urbana No. 4 existe un formato de poder especial otorgado por **ALFONSO GARCÍA GALVÍS**, en calidad de propietario del predio ubicado en la Carrera 1 E No. 78 – 91 “... y otros”, a la señora **LUZ MARINA CALDERÓN** otorgado el día 14 de marzo de 2002, que con claridad corresponde al trámite en cita y en consecuencia no podía hacerse extensivo al expediente 02 – 4 – 0896, (iniciado **CUATRO MESES DESPUÉS**) entre otras razones, porque: i. para la época de su otorgamiento, el señor **ALFONSO GARCÍA GALVÍS**, solo podía representar a la sociedad **INVERSIONES MONTERREY** y no a una sociedad que para esa época no había nacido a la vida jurídica, ni era la titular de derechos reales de los predios objeto del trámite, ii. la sociedad **INVERSIONES MONTERREY** no era la sociedad que dio inicio al trámite 02 – 4 – 0896 (conforme se desprende del Formulario Único de Solicitud No. CU – 008272) y en consecuencia su representante legal, no podía otorgar poder en calidad de tal, iii. para la época de presentación de la solicitud de licencia, dentro del trámite 01 – 4 – 2059 la



Continuación de la Resolución No. No 0024 09 ENE. 2007

Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

sociedad INVERSIONES MONTERREY no era la propietaria de todos los predios y en algunos de ellos solo tenía cuota parte de derechos reales, lo que sin lugar a dudas permite inferir que el poder al no ser otorgado por la totalidad de los titulares de derechos reales de los predios, no le daba legitimidad a la señora CALDERON, para solicitar y tramitar la licencia, iv. porque un poder especial otorgado para un trámite (expediente 01 – 4 – 2059) no puede utilizarse en otro (expediente 02 – 4 – 0896), es por ello que se llama especial, y v. porque revisado el poder no existe constancia de haber sido presentado en debida forma.

(...)(Negrillas y subrayas fuera de texto)

- Expresa el apoderado que la señora **CALDERON**, "... a su vez representaba a las Sociedades **INEGO LTDA Y PAYAN SCHNEIDER LTDA** según se observa en la parte final de los poderes que le habían conferido los representantes legales de esas sociedades visibles a folios 93 y 94 del expediente 02 – 4 – 0896...". Sin embargo en las páginas 49 y 50 de la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006 esa argumentación se desvirtúa, como a continuación nuevamente se transcribe:

"(...)

i. Porque en el Formulario Único de Solicitud CU – 008272 del 18 de julio de 2002, la sociedad titular del proyecto es **ALTOS DE BELMONTE I**, circunstancia que como se ha demostrado, dio lugar a que la solicitud fuera presentada por una persona inexistente y que por tanto no podía ser titular ni solicitante válido.

ii. Porque los poderes otorgados, el 11 de diciembre de 2001, por los representantes legales de **PAYAN SCHNEIDER LTDA** e **INEGO LTDA**, al señor **ALFONSO GARCÍA GALVIS**, no fueron utilizados por éste para iniciar el trámite, ya que la solicitante, según consta en el formulario, fue la señora **LUZ MARINA CALDERÓN DE VERGNAUD**, quien como se ha demostrado recibió poder para actuar solo hasta el 13 de noviembre de 2003 de parte del señor **ALFONSO GARCÍA GALVIS**, y no precisamente como autorizado de **PAYAN SCHNEIDER LTDA** e **INEGO LTDA**, sino como representante legal de la Sociedad **ALTOS DE BELMONTE I**, constituida más de diez meses después de la solicitud.

iii. Porque si el solicitante hubiera sido el señor **ALFONSO GARCÍA GALVIS** (y no **LUZ MARINA CALDERÓN**), requería poder, no solo de **PAYAN SCHNEIDER LTDA** e **INEGO LTDA**, sino también de la señora **FLORENCIA BORRERO** en ese momento propietaria de uno de los predios objeto de dicha solicitud."

Lo anterior, evidencia la ilicitud de los medios que dieron lugar a la expedición de la licencia de construcción, desde el momento mismo de la radicación, (el 18 de julio de 2002), por cuanto el Formulario Único, no fue presentado por quien válidamente podía hacerlo y porque la sociedad **ALTOS DE BELMONTE I** relacionada como titular no lo era, porque ni existía ni podía ser propietaria de derecho real alguno sobre los predios. Esta situación implicaba para el Curador Urbano No. 4 al verificar tan ostensible y evidente irregularidad, efectuar los requerimientos y formular las observaciones del caso, y consecuentemente archivar el trámite una vez operado el desistimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados de presentar otra solicitud, conforme a la normatividad en ese momento vigente y con la documentación inherente a la nueva



Continuación de la Resolución No. No 0024 09 ENE. 2007

Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

sociedad, al englobe y a la transferencia del derecho real de dominio a la sociedad **ALTOS DE BELMONTE I**, situación que como se ha probado fehacientemente, se dio diez meses después de la radicación.

Por todas las razones contenidas en los literales a y b del presente numeral, reiterativas de las que fundamentaron la revocatoria de la Licencia de Construcción No. LC 04 – 4 – 0861 del 30 de junio de 2004, se demuestra y acredita con suficiencia los medios ilegales determinantes en su expedición, no siendo simplemente “... sospechas o intuiciones de la administración”, como lo expresa el apoderado, en su nueva versión de la defensa.

2.4. En cuanto al numeral 2.2., del capítulo I., del escrito de reposición, denominado “Segundo argumento del “error de hecho por falso juicio de existencia en la modalidad falsa apreciación de la prueba” y segundo y tercer argumentos del llamado “error de hecho por falso juicio de existencia en la modalidad falta de apreciación de la prueba”.

a. Argumentos de la defensa contenidos en el numeral 2.2.1 “Sobre la falta de certeza de cuales fueron los documentos que se presentaron con la primera solicitud.”.

El apoderado manifiesta su desacuerdo con la afirmación de este Despacho, consistente en que revisado el expediente 01 – 4 – 2059 de la Curaduría Urbana No. 4 de esta ciudad, no existe soporte documental alguno que indique expresamente cuáles fueron los documentos aportados al momento de la radicación del primer trámite, toda vez que “... al leer el Auto de Trámite de fecha 2 de agosto de 2002, proferido por el Curador Urbano No. 4 de Bogotá... se establece “Que mediante expediente 01 – 4 – 2059 del 14 de diciembre de 2001... esta solicitud fue radicada con la totalidad de la documentación que exigen los artículos 10, 11 y 12 del Decreto Nacional 1052 de 1998...”, lo que en su entender “demuestra si existe prueba que señala cuales fueron los documentos entregados con la primera solicitud.”. Afirmaciones sobre las que es dable señalar:

- Tal como se indicó en la Resolución objeto del presente recurso, varios meses antes de la expedición del Auto de Trámite del 2 de agosto de 2002, se emitió un oficio de observaciones y requerimientos, de fecha 31 de enero de 2002, en el que se expresa:

“1. se debe corregir direcciones según recibos de impuesto predial o certificado de nomenclatura.

2. Se debe anexar Certificado de Constitución y Gerencia, con fecha de expedición no superior a tres (3) meses de la fecha de radicación del proyecto de Payan Schenider Ltda.. Y (Sic) Inego Ltda...

3. Anexar memoria de cálculos y estudio de suelos según norma sismorresistente de 98 y el decreto 074 de microzonificación sísmica de Bogotá.



Continuación de la Resolución No. 0024 09 ENE. 2007

Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

De la misma forma le comunico que una vez iniciado el estudio del proyecto, se han encontrado las siguientes observaciones:

1. Se le recomienda anexar plano de loteo y manzana catastral para verificar área, linderos, vecinos, antejardín, voladizo y si el predio tiene subdivisión predial.
2. Se debe anexar copia de la matrícula profesional del arquitecto proyectista e ingeniero civil.
3. Debe corregir cuadro de estacionamientos en planos.
4. Se debe identificar equipamiento comunal y numero de aptos. En planos arquitectónicos.
5. Se debe acotar y aclarar los aislamientos lateral y posterior en todos los puntos críticos con respecto al lindero.
6. Se deben acotar voladizos y distancia entre edificaciones.
7. Es necesario justificar la circulación vehicular en el área de antejardín.
8. No se permite demolición total en C – RE – 01 – 6 – A (C – 2). Según decreto 1210 de 1997.
9. Se deben corregir observaciones hechas en planos.
10. Se deben actualizar cortes y fachadas.
11. Se debe justificar la existencia de la cesión tipo A del predio colindante. (...)”

Conforme a lo anterior, es claro:

- i. Que al momento de la realización del escrito de requerimientos y observaciones, no se habían aportado al trámite los estudios (cálculos) estructurales.
- ii. Que el estudio de suelos y los planos arquitectónicos fueron objeto de observaciones tendientes a su corrección.

De esos requerimientos no consta en el expediente que el solicitante se haya allanado a aportarlos y/o corregirlos, en tanto sí obra soporte documental que permite concluir que ello no sucedió, toda vez que en el oficio de fecha 18 de diciembre de 2002 se indica expresamente al señor ALFONSO GARCÍA GALVÍS que “... en nuestra Curaduría reposa el expediente de la referencia a la espera del cumplimiento de los requerimientos y/o observaciones por parte de Usted(es) cuyo plazo se encuentra vencido ...”, y en la comunicación del 15 de enero de 2003, se le dice que “... debe acercarse a este despacho para reclamar los documentos relacionados con el expediente No. 0142059, por cuanto su solicitud se entendió desistida de conformidad con el artículo 13 del C. C. A.” (Negrillas y subrayas fuera de texto)

Anotaciones que permiten demostrar objetivamente, que existen precedentes documentales de los que se infiere que en el momento de la presentación de la solicitud de licencia de construcción, no se aportaron la totalidad de documentos exigidos para el efecto por la normatividad entonces vigente.

b. Argumentos de la defensa contenidos en el numeral 2.2.2 “Sobre la falta de aporte y



Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

corrección de los documentos exigidos en el primer trámite.” – Expediente 01 – 4 – 2059.

En cuanto a los documentos (memorias de cálculo) que en la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, se indica que no fueron aportados en el trámite administrativo 01 – 4 – 2059, es necesario reiterar que no existe soporte documental alguno que pruebe de manera cierta, que las memorias de cálculo fueron anexadas a éste, como si existe evidencia objetiva de ello en relación con la restante documentación que hace parte del trámite, ya sea porque está incorporada en el expediente o porque a ella se hace referencia en documentos diversos (como el escrito de observaciones y requerimientos del 31 de enero de 2002 o el formato – Check list, de la documentación que acompañaba la solicitud de licencia – folio 15 del expediente). Sin embargo, este Despacho debe indicar que existen indicios de la existencia de memorias de cálculo presentadas dentro del trámite 01 – 4 – 2059, siendo éstos: el “formato para desistimiento por parte del interesado” del 22 de agosto de 2003 obrante a folio 24 de ese expediente, y el señalamiento realizado en el escrito del 2 de agosto de 2004 por el señor **JULIO VERGARA**, sobre la existencia de unas “*memorias de cálculo estructural*” del año 2000 (folio 239 del expediente 02 – 4 – 0896), esta última una expresión de la que no se puede inferir que esas memorias hayan sido efectivamente aportadas al expediente, tal como se evidenciará en apartes posteriores. Por el contrario, sí existen expresiones dentro de ese expediente administrativo, que demuestran que las memorias de cálculos no fueron aportadas (comunicación del 31 de enero de 2002 en la que se expresa: “... *me permito comunicarme con Usted(es) con el objeto de requerirlo(s) para que aporte la siguiente información y documentación... Anexar memoria de cálculos y estudio de suelos según la norma sismorresistente de 98 y el decreto 074 de microzonificación sísmica de Bogotá...*”); e igualmente obran comunicaciones como las del 18 de diciembre de 2002 y del 15 de enero de 2003; en la primera de ellas se les solicita cumplir con los requerimientos realizados, y, en la segunda se les informa que producto del no cumplimiento del escrito de requerimientos se ha entendido desistido el trámite.

Realizada la anterior precisión, es necesario reiterar que pese a la existencia de indicios de radicación de memorias de cálculo dentro del expediente 01 – 4 – 2059, no existe evidencia alguna de la realización de un desglose de documentos del expediente 01 – 4 – 2059 al 02 – 4 – 0896, así como tampoco de una radicación en debida forma, dentro del último de los trámites en mención, tal como se demostró en la Resolución objeto de impugnación.

Ahora bien, las expresiones del señor **JULIO VERGARA GARCÍA**, contenidas en el escrito del 2 de agosto de 2004, obrante a folios 235 a 239 del expediente 02 – 4 – 0896, en el sentido de señalar que “... *no es claro porqué para una misma licencia de construcción existan dos proyectos estructurales distintos aprobados por las firmas P y D y PCA.*”, no son demostrativas de que los cálculos estructurales realizados en el año 2000 fueron anexados al trámite administrativo 01 – 4 – 2059, ni mucho menos que ellos obraban dentro del expediente 02 – 4 – 0869, en la medida que tal como lo indica el señor Vergara, el estudio por él realizado se hizo con base en “... *documentos recibidos el día 30 de julio de 2004,...*”, esto es, fueron entregados por los solicitantes del concepto (la señora Amanda Zapata S., representante legal de la firma Admiaseo Ltda.), no pudiendo concluirse entonces, que ellos correspondan a la documentación



Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

que obraba en los dos expedientes, tal como lo infiere el apoderado.

De igual forma, el apoderado considera que en vigencia del Decreto Nacional 1052 de 1998, la radicación en debida forma tenía que ver tan solo "... con el cumplimiento **"formal"** de los documentos que se deben aportar para que una solicitud de licencia se encuentre debidamente radicada o presentada...", afirmaciones que este Despacho no comparte, toda vez que como se indicó en la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006²⁹, en vigencia del Decreto Nacional 1052 de 1998, la radicación en debida forma, comportaba:

"(...)

i. Que la solicitud reuniera las exigencias previstas en los artículos 10 y 12 del Decreto en cita, las cuales, al no ser presentadas al momento de la radicación del trámite, imponían la obligación de requerir al solicitante y/o titular de la licencia con el fin de que aportara la documentación faltante, en los términos del artículo 12³⁰ del Código Contencioso Administrativo, y que en caso de no hacerlo dentro del término de dos meses luego de entregada la respectiva comunicación implicaba la ocurrencia del desistimiento tácito, previsto en el artículo 13 *ibidem*.

ii. Que la solicitud, los documentos mínimos requeridos para proceder a su estudio y el proyecto mismo no fueran objeto de observaciones, ya que de ocurrir ello, implicaba la necesidad de realizarlas por parte del Curador, las cuales al no ser subsanadas dentro de los 30 días calendario siguientes, generaba la ocurrencia del desistimiento tácito;..."

Con claridad en lo anterior, no es de recibo la interpretación del apoderado en tanto expresa que "Una cosa es la debida **"forma"** y otra que los documentos estén **"correctamente"** presentados pues si la única alternativa es que tuviesen que ser presentados de forma tal que no requieran corrección alguna desde la fecha de radicación, no se podrían solicitar tales correcciones, sino que el Curador Urbano o la entidad competente tendría que negar la solicitud de licencia si llegare a existir alguna deficiencia.", toda vez que es el mismo Decreto Nacional 1052 de 1998, el que en su artículo 56, establecía que luego de radicada una solicitud de licencia, el Curador Urbano debía requerir al peticionario para que dentro de los 30 días siguientes a la expedición de la comunicación en tal sentido, la presentara correctamente, esto es, en debida forma, so pena de entenderla desistida; en tal sentido, no es correcto lo afirmado en el recurso, puesto que, sin lugar a dudas, dentro del trámite los peticionarios si tenían un término para corregir y completar la documentación necesaria para la obtención de la licencia (30 días).

También afirma el apoderado que "La razón por la cual el Departamento Administrativo de

²⁹ Página 44 de la Resolución – literal b, numeral tercero de los Razonamientos del Despacho.

³⁰ "ARTÍCULO 12. Si las informaciones o documentos que proporcione el interesado al iniciar una actuación administrativa no son suficientes para decidir, se le requerirá, por una sola vez, con toda precisión y en la misma forma verbal o escrita en que haya actuado, el aporte de lo que haga falta. Este requerimiento interrumpirá los términos establecidos para que las autoridades decidan. Desde el momento en que el interesado aporte nuevos documentos o informaciones con el propósito de satisfacer el requerimiento, comenzarán otra vez a correr los términos pero, en adelante, las autoridades no podrán pedir más complementos, y decidirán con base en aquello de que dispongan."



Continuación de la Resolución No. No 0024 09 ENE. 2007

Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

Planeación Distrital no tiene copia de los cálculo (Sic) estructura (Sic) elaborados por la firma Proyectos y Diseños Ltda. P y D el **20 de agosto de 2000**, se debe a que en la **GUÍA No. 2** proferida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital ... se establece que sobre tales expedientes se debe hacer la "**depuración**", según la cual se deben eliminar las copias o duplicados dentro del mismo expediente así como los borradores. Mas adelante en el inventario a transferir se indica que en el archivo se deben anexar los planos arquitectónicos, **los planos estructurales, los estudios de suelos y los cálculos estructurales entre otros, documentos que según la circular también deben ser depurados...** En conclusión, está plenamente probado que en el expediente que reposa en la Curaduría Urbana No. 4 de Bogotá y en el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, no aparecen las memorias de cálculo elaboradas por la firma Proyectos y Diseños Ltda. P y D de **Agosto de 2000...** ni los **Planos Estructurales** elaborados por la misma firma en los meses de **Julio y agosto de 2000...**, los cuales relacionó el ingeniero **JULIO VERGARA GARCÍA** al hacer para la firma **ANDIASEO(Sic)** el estudio de los documentos que reposaban en el archivo de la licencia en cuestión, por la sencilla razón que sobre el expediente se hizo la depuración de que trata la **GUÍA No. 2** del Departamento Administrativo de Planeación Distrital...". Sobre el razonamiento transcrito se hace claridad en los siguientes aspectos:

- No está probado que dentro de los documentos objeto de depuración dentro del expediente 02 - 4 - 0896 de la Curaduría Urbana No. 4 de esta ciudad, se hayan eliminado los cálculos estructurales que el apoderado manifiesta, fueron realizados en el año 2000, toda vez que el acta de transferencia de expedientes del 26 de septiembre de 2005 no señala ni tácita ni expresamente que sobre las memorias de cálculo se hubiese realizado depuración o expurgo.

- Por el contrario, sí existe evidencia contundente en cuanto a que el 22 de agosto de 2003, se entregaron a **LUZ MARINA CALDERON** 3 cuadernos de cálculos estructurales, tal como expresamente se indica en el folio 24 del expediente 01 - 4 - 2059, estudios respecto de los cuales, luego de revisada la documental objeto de análisis (expedientes 01 - 4 - 2059 y 02 - 4 - 0896) no hay prueba ni siquiera indiciaria de haber sido efectivamente presentados dentro del expediente 02 - 4 - 0896, toda vez que si la señora **CALDERÓN** los retiró del primero, no era posible que hubieran sido objeto de desglose de un expediente a otro como lo intentó hacer ver el Curador Urbano No. 4 y como lo afirma el apoderado.

- En párrafos precedentes se ha explicado por qué las afirmaciones realizadas por el señor **JULIO VERGARA GARCÍA**, no son demostrativas de que los cálculos estructurales realizados en el año 2000, fueron anexados al trámite administrativo 01 - 4 - 2059, así como tampoco que ellos obraban dentro del expediente 02 - 4 - 0869.

- Debe resaltarse el hecho de que cuando el apoderado, dentro de su argumentación referida al estudio presentado por el señor **JULIO VERGARA GARCÍA**, manifiesta que las memorias de cálculo concuerdan con "...los estudios finales que se elaboraron para el proyecto definitivo en el año 2004 de acuerdo con las correcciones que hizo la Curaduría Urbana No. 4 de Bogotá...", está reconociendo expresamente que los estudios realizados en el año 2000 por la firma P y D Ltda no cumplían con las previsiones mínimas requeridas por la Curaduría, y que sólo fueron



Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

objeto de "correcciones" a requerimiento del Curador, en el año 2004, lo que implica que solo podría hablarse de radicación en debida forma, hasta ese año, cosa que tampoco ocurrió, pues los cálculos estructurales aportados al trámite 02-4-0896 no cumplen con el requisito exigido en el literal a) del artículo 12³¹ del Decreto Nacional 1052 de 1998, en relación con la obligación de presentarlos debidamente firmados o rotulados con un sello seco por los profesionales facultados para ese fin; situación sobre la que el apoderado no hace referencia alguna, pese a ser uno de los elementos determinantes para que en el presente asunto, pueda indicarse no solo que al no darse cumplimiento a los requerimientos dentro del término previsto en el artículo 56 del Decreto Nacional 1052 operó el desistimiento tácito de la solicitud debiéndose haber radicado una nueva petición, sino que en el mejor de los casos y en el hipotético de que los documentos presentados en el año 2004 permitieran predicar la radicación en debida forma, el titular de la licencia no podía ser beneficiado con régimen de transición alguno, y en consecuencia las normas aplicables al trámite no eran las del Acuerdo 6 de 1990 y sus decretos reglamentarios sino las del Decreto Distrital 075 del 20 de marzo de 2003 – UPZ El Refugio/Chicó – Lago.

c. Argumentos de la defensa contenidos en el numeral 2.2.3. "Sobre la prueba de que no hubo desglose del expediente 01 – 4 – 2059 al expediente 02 – 4 – 0896, porque los documentos del primer trámite le fueron entregados a la tramitadora Luz marina Calderón."

El primer argumento en el que el apoderado fundamenta su alegato, consiste en señalar que "Los documentos que se entregaron a la señora **LUZ MARINA CALDERÓN** el 22 de agosto de 2003 al desistir del expediente 01 – 4 – 2059, fueron unas copias que sobran dentro del expediente", expresión que no pasa de ser una simple afirmación en la medida que no existe prueba que lo demuestre y por el contrario en el Acta de Descargo que obra a folio 24 del expediente 01 – 4 – 2059 suscrita por **LUZ MARINA CALDERÓN**, se hace una relación de los documentos (no "copias sobrantes") que le son devueltos, donde se lee con claridad que se entregan 3 cuadernos de cálculos estructurales.

El apoderado manifiesta que en el informe realizado por **JULIO VERGARA GARCÍA** "... el Ingeniero certifica que dentro del expediente obraban los mismos documentos que supone el Despacho, entre otros le habían sido devueltos a la señora Luz Marina Calderón. Además nótese que dentro del acta no se devuelve el estudio de suelos. Si se hubiera recibido todo el expediente lo más lógico era que también se hubiera entregado el estudio de suelos que como está probado, estaba en la Curaduría al menos desde el 2 de agosto de 2002 y que según la relación de documentos hecha por el ingeniero **JULIO VERGARA** también obraba en el

³¹ **Artículo 12°.-** Documentos adicionales para la licencia de construcción. Para las solicitudes de licencia de construcción, además de los documentos señalados en los numerales 1 a 7 del artículo 10 del presente Decreto, deberá acompañarse: ... a) Tres (3) juegos de la memoria de los cálculos estructurales, de los diseños estructurales, de las memorias de otros diseños no estructurales y de los estudios geotécnicos y de suelos que sirvan para determinar la estabilidad de la obra, elaborados de conformidad con las normas de construcción sismorresistentes vigentes al momento de la solicitud, en especial las contenidas en el capítulo A.11 del título A del Decreto 33 de 1998, debidamente firmados o rotulados con un sello seco por los profesionales facultados para ese fin, quienes se harán responsables legalmente de los diseños y de la información contenidos en ellos... (Negritas y subrayas fuera de texto)



Continuación de la Resolución No. No 0024 09 ENE. 2007

Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

expediente.”, afirmaciones sobre las que es pertinente señalar:

- Revisado el escrito realizado por el señor **JULIO VERGARA** obrante a folios 235 a 239 del expediente 02 – 4 – 0896, no existe mención expresa por él realizada, *“que certifique”* que dentro del expediente en cita obraban los cálculos estructurales o cualquiera otra documentación, en la medida que manifiesta, y esto si conforme a las expresiones contenidas en el estudio por él realizado, que ese estudio se hizo con base en *“... documentos recibidos el día 30 de julio de 2004,...”*, esto es, le fueron entregados por los solicitantes del concepto (la señora Amanda Zapata S., representante legal de la firma Admiaseo Ltda.).

- En relación con el estudio de suelos que hace parte del expediente 02 – 4 – 0896, tal como lo indica el apoderado, el Acta de Descargo que obra a folio 24 del expediente 01 – 4 – 2059, no relaciona como uno de los documentos devueltos a la señora **CALDERÓN** el estudio de suelos; situación que para nada cambia la no ocurrencia de un desglose, ni la configuración del desistimiento tácito que impedía continuar el trámite, y en el hipotético que el desistimiento no hubiera ocurrido, el hecho de que la radicación no fue efectuada en debida forma.

d. Argumentos de la defensa contenidos en el numeral 2.2.4. “Sobre la falta de corrección de los documentos presentados”.

En lo referente a la *“contradicción”* que el apoderado aduce haber encontrado entre las siguientes expresiones de la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, que indican: i. que dentro del expediente 01 – 4 – 2059, los cálculos estructurales no fueron entregados y, ii. que en párrafos posteriores y a propósito del escrito de requerimientos del 31 de enero de 2002 se manifiesta que éstos fueron objeto de observaciones en la citada comunicación; debe señalarse que el contexto dentro del cual encuentra una aparente contradicción, no es tal, si se tiene en cuenta que la conclusión a la que llega el Despacho recoge lo solicitado en el citado requerimiento del 31 de enero de 2002, es decir, que se debían anexar al trámite las memorias de cálculo y en relación, con el estudio de suelos, corregirlos de conformidad con la norma sismorresistente de 1998 y el decreto 074 de microzonificación sísmica. Ahora bien, el hecho de haber utilizado en un párrafo posterior (página 52), la expresión *“que debían ser corregidos para ser considerados documentos idóneos para tomar una decisión”*, buscaba agrupar en una sola categoría, la deficiencia evidenciada en el citado oficio, respecto de la necesidad de ajustar el trámite mediante el aporte de la memoria de cálculos y la adecuación de los estudios de suelos a las normas sismorresistentes.

En cuanto al señalamiento del apoderado consistente en que *“... es preciso tener en cuenta que las radicaciones 01 – 4 – 2059 y 02 – 4 – 0896 corresponden a dos expedientes diferentes y el hecho de que se hubieran practicado observaciones a la primera radicación las mismas no eran obligatorias ni condicionaban la segunda radicación, pues a la luz del artículo 56 del Decreto 1052 de 1998, los documentos que se presentaban en cada una de ellas estaban sujetos a ajustes o correcciones. Es decir bajo las normas del Decreto 1052 de 1998 las observaciones hechas en un expediente no son obligatorias para el otro expediente por cuanto se trata de trámites independientes, procesalmente hablando.”*, sólo basta resaltar que lo así expresado



Continuación de la Resolución No. 0024 09 ENE. 2007

Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

contradice toda la argumentación expuesta por los dos apoderados de la sociedad titular de la licencia en el curso de la presente actuación de revocatoria directa, en la que siempre han alegado, una radicación en debida forma en el trámite 02-4-0896 a partir de la existencia de un "desglose" de un primer expediente, en el cual se formularon observaciones y requerimientos que al no haberse cumplido, dieron lugar a que operara su desistimiento.

Ahora bien, es el mismo apoderado quien en el recurso, punto 2.2.2. "SOBRE LA FALTA DE APOORTE Y CORRECCIÓN DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN EL PRIMER TRÁMITE", expresa en relación con "... los estudios finales..." que éstos "... se elaboraron para el proyecto definitivo en el año 2004 de acuerdo con las correcciones que hizo la Curaduría Urbana No. 4 de Bogotá...". Entonces, no queda claro para el Despacho cuál es la línea argumentativa frente a la que debe pronunciarse, o eran independientes los dos trámites o estaban íntimamente relacionados por razón del alegado "desglose", ordenado en dos autos de trámite por parte del Curador el 2 de agosto de 2002 y el 2 de agosto de 2004, con una diferencia de dos años. No sobra recordar que el primero de los apoderados de la sociedad recurrente, para justificar la debida forma en el segundo trámite, manifestó expresamente que el proyecto era exactamente igual en las dos actuaciones.

Para terminar este Despacho se ha pronunciado suficientemente sobre lo que en vigencia del Decreto Nacional 1052 de 1998, se consideraba presentación en legal y debida forma de una licencia urbanística, tanto en la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006 literal d, numeral 3 de los Razonamientos del Despacho, así como en el presente acto administrativo.

e. Argumentos de la defensa contenidos en el numeral 2.2.5. "Sobre la falta de prueba del aporte de los planos arquitectónicos en la radicación original".

En relación con este aspecto, es necesario transcribir el aparte de la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, con el que el apoderado no se encuentra de acuerdo:

"(...)

- Revisadas las dieciocho copias heliográficas del proyecto arquitectónico debidamente firmadas o rotuladas por un arquitecto³², no aparece constancia expresa de que dichos planos, hayan sido los originalmente aportados al expediente 01 - 4 - 2059; en ellos se observa que corresponden al No. de obra 190/03. Igualmente aparece consignada la fecha 01 de junio de 2004 (realizada con un fechador).

(...)"(Negrillas y subrayas fuera de texto)

De la lectura textual de la anterior redacción, es claro que este Despacho no afirma, como parece entender el apoderado, que no se aportaron planos arquitectónicos antes del 1 de junio de 2004, bien sea al expediente 01 - 4 - 2059 y/o al 02 - 4 - 0896; lo que allí se dice es que no

³² Requisito para la presentación de la solicitud de licencia de construcción, conforme lo indica el literal b del artículo 12 del Decreto Nacional 1052 de 1998.



Continuación de la Resolución No. **No 0024 09 ENE. 2007**

Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

aparece constancia expresa de que los planos correspondientes al “No. de obra 190/03” en los que se anota con un fechador 01 de junio de 2004, correspondan a los inicialmente aportados al primero de los expedientes, lo que torna inocuo algún pronunciamiento sobre las alegaciones del apoderado que buscan demostrar que en el último de los expedientes relacionados, si fueron aportados planos arquitectónicos.

Sin embargo es precisamente, el mismo apoderado quien acepta que “... la Curaduría Urbana No. 4 reconoce de manera expresa que para la fecha de radicación de la segunda solicitud de licencia es decir para el **18 de julio de 2002** si existían en ese establecimiento los planos arquitectónicos del proyecto. Con la certeza de la existencia de estos planos se da cumplimiento al requisito señalado en el artículo 12 literal b) del decreto 1052 de 1998, lo cual no obsta para que durante el trámite iniciado en el nuevo expediente, es decir el radicado bajo el número 02 – 4 – 0896, se hicieran por parte de la curaduría nuevos requerimientos y como consecuencia de ello se actualizara la información presentando nuevos planos. Por esta razón durante el trámite del expediente se aportaron los planos que finalmente fueron aprobados lo cual no constituye ni por asomo ningún medio o maniobra fraudulenta como lo pretende hacer ver el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.”. En relación con este pronunciamiento se señala:

- El hecho de que las correcciones a las observaciones efectuadas a los planos arquitectónicos por la Curaduría Urbana No. 4 de esta ciudad, se hayan realizado (presumiblemente) en el año 2003 y que su radicación en el trámite haya ocurrido el 1 de junio de 2004, implica, que sólo hasta esa fecha fueron debidamente presentados para entender que esa radicación se hizo en debida forma, de acuerdo al Decreto Nacional 1052 de 1998. En consecuencia implicaba que la licencia de construcción no pudiera ser expedida con las normas del Acuerdo Distrital 6 de 1990 y sus Decretos reglamentarios, sino con las previstas en el Decreto Distrital 075 del 20 de marzo de 2003 – UPZ El Refugio/Chicó – Lago.

Conforme a lo anterior, el haber obviado la configuración del desistimiento tácito en lo relacionado con los planos arquitectónicos por permitir a los interesados que las correcciones a los inicialmente presentados se efectuaran casi dos años después de haberse radicado la solicitud, violentó todos los términos legales para mantener en el tiempo un trámite que derivó en la ilegal aplicación de un régimen de transición a pesar del advenimiento de un cambio normativo (expedición de la UPZ El Refugio/Chicó – Lago), todo ello implicativo de la ocurrencia de medios ilegales para beneficiar en contravía de lo dispuesto en la ley, al titular de la Licencia de Construcción No. LC 04 – 4 – 0861.

f. Argumentos de la defensa contenidos en el numeral 2.2.6. “Sobre la expedición del auto de trámite del 2 de agosto de 2004 que ordena el desglose del expediente 01 – 4 – 2059 al expediente 02 – 4 – 0896 el cual según el Departamento Administrativo de Planeación Distrital comprueba que nunca antes de esa fecha se había hecho el desglose” y 2.2.7. “Sobre los recursos que se interpusieron en el trámite que comprueban que el desglose ordenado en el auto del 2 de agosto de 2002 nunca se realizó”.



Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

El apoderado señala que la expedición del Auto de Trámite del 2 de agosto de 2004 *"debió constituir una simple equivocación consistente en repetir el Auto de Trámite de 2 de agosto de 2002 que ya obraba en el expediente"*, afirmación que sustenta en el hecho de que en el estudio realizado por **JULIO VERGARA GARCÍA** el 2 de agosto de 2004 se hace referencia a los planos arquitectónicos *"fechados el 7 de enero de 2004"*³³ así como a los cálculos estructurales, mientras que en el estudio realizado por el señor **ERNESTO JORGE CLAVIJO**, se indica respecto de los planos arquitectónicos, que *"... están marcados con un sello original con la anotación "FIEL COPIA DEL ORIGINAL" y con sellos en fotocopia de la Curaduría Urbana No. 4 y con visto bueno y firma del arquitecto de análisis..."*, por lo que en su parecer es ilógico que el DAPD concluya que solo hasta el 2 de agosto de 2004 se realizó el desglose, *"... ya que si hasta el 2 de agosto de 2004 se hizo efectivo el desglose como es posible que para la misma fecha el arquitecto... manifestara que le fueron enviados los documentos de la licencia y preparó un concepto sobre ellos"*.

Frente a las anteriores afirmaciones, sea lo primero indicar, que las transcripciones que el apoderado hace de la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, se encuentran fuera de contexto, por lo que es necesario proceder a señalar de manera integral lo que en relación con este tema se expresó:

"(...)

*- Revisadas las dieciocho copias heliográficas del proyecto arquitectónico debidamente firmadas o rotuladas por un arquitecto*³⁴, *no aparece constancia expresa de que dichos planos, hayan sido los originalmente aportados al expediente 01 – 4 – 2059; en ellos se observa que corresponden al No. de obra 190/03. Igualmente aparece consignada la fecha 01 de junio de 2004 (realizada con un fechador).*

- Como argumento adicional a la serie de medios ilícitos detectados en el supuesto desglose de documentos del primer expediente al que finalmente concluyó con la expedición de la licencia, no encuentra este Despacho razón jurídica ni medianamente lógica para que el Curador Urbano No. 4 haya expedido el Auto de Trámite del 2 de agosto de 2004, por medio del cual, y extrañamente cuando ya había proferido la Licencia No. LC 04 – 4 – 0861 del 30 de junio de 2004, nuevamente "Se autoriza el desglose de los documentos de la solicitud de licencia de construcción del expediente 0142059 al expediente 0240896" (subrayadas fuera de texto).

De lo expuesto se infiere:

i. Que el Curador Urbano No. 4 reconoce que hasta el 2 de agosto de 2004 (un mes y dos días después de haberse expedido la Licencia de Construcción No. LC 04 – 4 – 0861 del 30 de junio de 2004) no se realizó desglose alguno, en la medida que por Auto de Trámite de

³³ Tal como expresamente se indica en el estudio realizado por **JULIO VERGARA**, el día 2 de agosto de 2004 (folio 239 del expediente 02 – 4 – 0896).

³⁴ Requisito para la presentación de la solicitud de licencia de construcción, conforme lo indica el literal b del artículo 12 del Decreto Nacional 1052 de 1998.



Continuación de la Resolución No. **0024** 09 ENE. 2007

Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

esa fecha, resuelve autorizar "... el desglose de los documentos de la solicitud de licencia de construcción del expediente 0142059 al expediente 0240896. ...", lo que admitir que, dentro del tiempo que duró la actuación administrativa que derivó en la expedición de la licencia sub examine, no se hicieron llegar los originales que los abogados de la defensa, afirman, se trasladaron de un expediente a otro. De lo contrario, no se entiende ni bajo la óptica del derecho ni la del sentido común, con qué fin el Curador Urbano No. 4 lo expidió, ordenando exactamente lo mismo.

ii. Que obran en la actuación dos escritos mediante los que se interponen recursos por los interesados y posteriores a la expedición del Auto de Trámite del 2 de agosto de 2002 (los relacionados en los literales **q** y **s** numeral 2 de este acápite), que solo pueden llevar a concluir que en la fecha en que ellos fueron presentados (11 de julio y 25 de noviembre de 2003, respectivamente), al expediente objeto de la actuación, e independientemente de a quien puede endilgarse responsabilidad, no se habían allegado los documentos que se ordenó desglosar, porque de lo contrario, no se entiende con qué fin los solicitantes impugnaron decisiones que declararon desistido el trámite, argumentando que tal desistimiento no había operado, entre otras razones, por el hecho de haberse dispuesto un desglose, del que ha quedado debidamente demostrado, no se realizó efectivamente.

iii. Que las actuaciones que dentro del expediente, pretenden hacer valer la ejecución de un desglose que realmente no ocurrió, relacionadas con documentos trascendentales y de vital análisis para la expedición de una licencia de construcción, como son los cálculos y planos estructurales, implicaba que solo hasta la fecha cierta en que fueron allegados efectivamente al trámite, se entendiera presentada la solicitud en debida forma, como condición determinante para la aplicación del régimen normativo correspondiente

En cuanto a la fecha cierta en que el solicitante de la licencia presentó la solicitud en debida forma.

Habida cuenta que entre los requisitos previstos para entender presentada en debida forma una solicitud de licencia de construcción se encuentran los estudios y planos estructurales y en este evento no se puede tener certeza de la fecha en que fueron aportados al trámite, pero si la fecha de su realización (28 de enero y 17 de mayo de 2004, respectivamente), es claro para este Departamento, que de no existir los vicios de ilegalidad insubsanables evidenciados en relación con la información contenida en el Formulario Único No. CU 008272, la solicitud en debida forma de la Licencia de Construcción modalidad obra nueva y demolición total, no fue realizada antes de la entrada en vigencia del Decreto Distrital 075 del 20 de marzo de 2003 – UPZ El Refugio/Chicó - Lago, sino el 28 de enero de 2004 (en relación con los estudios estructurales) y el 17 de mayo de 2004 (en relación con los planos estructurales) o con posterioridad a dichas fechas, en la medida que solo hasta entonces fueron elaborados esos documentos, requisito mínimo para entender presentada en debida forma la solicitud, según se expresaba en el literal a del artículo 12 del Decreto Nacional 1052 de 1998.

(...)"

De la transcripción literal que precede puede concluirse:



Continuación de la Resolución No. ~~No 0024~~ 09 ENE. 2007

Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

- Es claro que en la Resolución impugnada no se busca demostrar que al expediente no se aportaron los planos arquitectónicos, las memorias de cálculo y los planos estructurales, sino que tales documentos no se allegaron al expediente como resultado de un desglose.

- Cuando en el aparte transcrito, se hace referencia a los planos arquitectónicos, no se está afirmando que no fueron aportados al expediente, porque sí obran dentro del mismo, sino que está demostrado que *"en ellos se observa que corresponden al No. de obra 190/03. Igualmente aparece consignada la fecha 01 de junio de 2004 (realizada con un fechador)"*, de lo que se infiere que este Despacho, dentro de la actuación administrativa y al no existir evidencia alguna de la ocurrencia de un desglose, estableció que esos planos se anexaron al expediente, el 1 de junio de 2004. De ahí que resulte lógico que el señor **ERNESTO JORGE CLAVIJO**, afirme en escrito del 2 de agosto de 2004 que las copias recibidas correspondían a los planos que obraban dentro del expediente.

- En relación con las memorias de cálculo y los planos estructurales, lo que se afirma en la Resolución impugnada es que tales documentos que obran en el expediente tienen respectivamente como fecha de elaboración 28 de enero de 2004 y 17 de mayo de 2004, lo que indica que sólo pudieron ser aportados al expediente 02-4-0896 con posterioridad a esas datas.

- Establecida la fecha de realización de los planos estructurales, de las memorias de cálculo y de los planos arquitectónicos, en la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006 se indica con toda claridad, que la radicación en debida forma de la Licencia de Construcción modalidad obra nueva y demolición total no fue realizada antes de la entrada en vigencia del Decreto Distrital 075 del 20 de marzo de 2003 – UPZ El Refugio/Chicó – Lago.

Por último, debe reiterarse que en el trámite administrativo tendiente a la obtención de la licencia, iniciado en vigencia del Decreto Nacional 1052 de 1998, la presentación en debida forma de la solicitud dentro del trámite administrativo 02 – 4 – 0896 de la Curaduría Urbana No. 4 de esta ciudad, no se cumplió, toda vez que tal como se demostró en la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006:

- Los únicos planos y memorias que aparecen en el expediente corresponden a documentos elaborados en el año 2004 y en consecuencia solo pudieron agregarse al expediente luego de esa fecha, a pesar de que la radicación del trámite se efectuó el 18 de julio de 2002.

- La solicitud nunca se radicó en debida forma ya que las memorias de cálculo al no ser firmadas por el profesional responsable del diseño no cumplió con los requisitos previstos en el literal a del artículo 12 del Decreto Nacional 1052 de 1998.

- No existe evidencia de la efectiva ocurrencia de un desglose del expediente 01 – 4 – 2059 al 02 – 4 – 0869.

- La solicitante de la licencia de construcción solo tuvo poder válido para actuar dentro del trámite 15 meses y 25 días luego de haber radicado la solicitud el 18 de julio de 2002.



Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

Actuaciones que implican la ocurrencia no de uno, sino de varios medios ilegales que permitieron el otorgamiento de la Licencia para el predio ubicado en la Avenida Carrera 1 No. 78 – 80, Carrera 3 No. No. 78 – 62, Carrera 3 No. 78 – 52 y Carrera 1 E No. 78 – 91, con fundamento en las normas urbanísticas previstas en el Acuerdo Distrital 6 de 1990 y sus Decretos Reglamentario, régimen normativo al que en el sub exámine no se tenía derecho, por no haberse dado el presupuesto necesario para acceder al régimen de transición, ya que como se ha reiterado, en la actuación que nos ocupa no se puede hablar de radicación en debida forma previa al cambio normativo que lo afectó (adopción del Decreto Distrital 075 del 20 de marzo de 2003 – UPZ El Refugio/Chicó – Lago).

g. Argumentos de la defensa contenidos en el numeral 2.2.8. “Sobre la falta de prueba de fecha cierta en que se presentó la solicitud de licencia”.

Alega en este punto el apoderado: “....para el proyecto inicialmente radicado el 18 de julio de 2002 se tuvieron en cuenta como anexos el estudio de suelos hecho **en el año de 1992**, las memorias de cálculo estructural (3) y planos estructurales (61) hechos **en agosto de 2000 y julio y agosto de 2000** respectivamente. Así se llega a la conclusión inequívoca que el estudio de suelos, las memorias de cálculo y los planos estructuras (sic) hechos en el año 2000, sí se presentaron junto con la solicitud de licencia del expediente 01-4-2059 y luego se tuvieron en cuenta como parte de la segunda radicación del 18 de julio de 2002 según lo ordenado en el Auto de Trámite del 2 de agosto de 2002”.

Sobre este particular en el aparte de la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006 denominado **“En cuanto a la fecha cierta en que el solicitante de la licencia presentó la solicitud en debida forma”**, a lo que se alude es a la fecha en que se entendió efectuada la radicación en **debida forma**, y no a la fecha en que fue presentada dicha solicitud, ya que es el propio acto administrativo impugnado el que reconoce, tal como figura en el formulario, que esa actuación se realizó el 18 de julio de 2002.

Ahora bien, debe aclararse que conforme se expresó en el numeral c precedente, del escrito del ingeniero **JULIO VERGARA GARCÍA** se puede determinar que existían unos estudios de suelos realizados en el año 1992 y una memorias de cálculo y planos estructurales elaborados en el año 2000, pero de ello no se puede inferir, como lo pretende el apoderado, que hubiesen entrado a formar parte del expediente 02 – 4 – 0896 como consecuencia de un desglose (entre otras razones porque tampoco pudo demostrarse la ocurrencia de un desglose).

En cuanto al razonamiento del apoderado consistente en que en la tarea de depuración de los archivos a transferir al DAPD, se eliminaron las copias o duplicados, se ha demostrado que no existe siquiera un indicio que demuestre que los planos o las memorias de cálculo hubieren sido objeto de este procedimiento, y por el contrario, sí se ha demostrado que esos documentos originales (y no las copias como lo afirma el apoderado) fueron entregados a la señora **LUZ MARINA CALDERÓN DE VERGNAUD** a propósito de la ocurrencia del desistimiento tácito



Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

que, por no allanarse a cumplir con los requerimientos realizados dentro del expediente 01 4 – 2059, operó en dicho trámite.

Independiente de si los documentos que el apoderado manifiesta se aportaron al trámite 02 – 4 – 0896, y de lo que no existe prueba alguna, ocurrió o no, esos documentos no permitirían hablar de que en vigencia del Decreto Nacional 1052 de 1998 existiera una radicación en legal y debida forma, en la medida que como se ha señalado en la Resolución impugnada y en el presente acto administrativo, ella consistía en:

“(...)

i. Que la solicitud reuniera las exigencias previstas en los artículos 10 y 12 del Decreto en cita, las cuales, al no ser presentadas al momento de la radicación del trámite, imponían la obligación de requerir al solicitante y/o titular de la licencia con el fin de que aportara la documentación faltante, en los términos del artículo 12 del Código Contencioso Administrativo, y que en caso de no hacerlo dentro del término de dos meses luego de entregada la respectiva comunicación implicaba la ocurrencia del desistimiento tácito, previsto en el artículo 13 ibidem.

ii. Que la solicitud, los documentos mínimos requeridos para proceder a su estudio y el proyecto mismo no fueran objeto de observaciones, ya que de ocurrir ello, implicaba la necesidad de realizarlas por parte del Curador, las cuales al no ser subsanadas dentro de los 30 días calendario siguientes, generaba la ocurrencia del desistimiento tácito;...”

Presupuestos que en el presente evento, solo se cumplieron en relación con los planos estructurales en el año 2004 y a la fecha aun no se ha verificado en lo referente a las memorias de cálculo toda vez que las realizadas en el 2004 adolecen de la exigencia de estar debidamente firmadas por quien las elaboró conforme lo establece el literal a) del artículo 12 del Decreto Nacional 1052 de 1998. Todo esto, adicional a las evidentes irregularidades demostradas en relación con el formulario único de solicitud, no solo por las inconsistencias evidenciadas en la Resolución impugnada a propósito de la primera postura de la defensa, sino de las expresamente reconocidas en el escrito de impugnación en cuanto al hecho de haberse mantenido en el diligenciamiento de un “nuevo formulario” (a raíz de la constitución de la sociedad titular y del englobe del predio objeto de la licencia, once meses después y claro, cuando ya estaba expedida la UPZ) de manera notoriamente anómala, la fecha consignada en la radicación inicial (18 de julio de 2002), cuando ya se encontraba ostensiblemente vencido el término para haber corregido las observaciones y requerimientos realizados por el Curador y por tanto, el plazo establecido en la norma para adoptar una decisión, lo que de forma inevitable implicaba entender desistido el trámite y archivado el expediente.

h. Argumentos de la defensa contenidos en el numeral 2.2.9. “Sobre los efectos jurídicos de los actos expedidos en el expediente por la curaduría urbana No. 4 de Bogotá”.

i. En cuanto al análisis que el apoderado hace al “... 1) “Escrito de requerimiento del 13 de agosto de 2002 ...”



Continuación de la Resolución No. No 0024 09 ENE. 2007

Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

El apoderado, al momento de transcribir el requerimiento realizado por un funcionario de la Curaduría Urbana No. 4 de esta ciudad el 13 de agosto de 2002, suprime algunos apartes que este Despacho considera fundamentales, por lo que a continuación se procede a su transcripción integral, así:

"(...)

- Anexar la totalidad del proyecto estructural (memorias y planos) y el correspondiente estudio de suelos conforme a la NSR – 98.

- Completar la documentación para dar curso al trámite solicitado.

- Se debe diligenciar en forma correcta y completa la solicitud de licencia, de acuerdo al instructivo sin enmendaduras y tachones.

- Este expediente no será estudiado hasta tanto NO se entreguen los requisitos fundamentales para su estudio de conformidad con el artículo 11 del C.C.A.

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TIENE(N) UN PLAZO DE DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ENVÍO DE ESTA COMUNICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 13 DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DE LO CONTRARIO SE ENTENDERÁ COMO DESISTIDO. (...)”(Negrillas y subrayas fuera de texto)

Conforme a lo anterior, para dar cumplimiento al requerimiento se debía no solo aportar las memorias, los planos y el estudio de suelos, sino que esos documentos (que conforme al escrito transcrito no se habían aportado) debían ajustarse a la normatividad sismorresistente, lo que en el presente evento y en relación con los planos estructurales y las memorias de cálculo, solo se cumplió hasta el año 2004, cuando efectivamente se aportaron, y no dentro del plazo de dos meses contados a partir del envío del requerimiento.

De igual forma, en el trámite administrativo 02 – 4 – 0896, está probado:

- Que en relación con las memorias de cálculo, ni al día de hoy, se ha cumplido con el requerimiento realizado el 13 de agosto de 2002, toda vez que las aportadas en el 2004 carecen del requisito de estar debidamente firmadas por el profesional responsable que las elaboró conforme lo indicaba el literal a) del artículo 12 del Decreto Nacional 1052 de 1998.

- Que el formulario único de solicitud contiene información y datos sobre hechos y situaciones que se constituyeron aproximadamente once meses después de la fecha de radicación.

Así las cosas e independientemente del desacuerdo manifestado por el apoderado, dentro del trámite administrativo operó un desistimiento tácito que en el sub exámine tenía como consecuencia el archivo del expediente y no su extensa y prolongada permanencia en el tiempo mientras los titulares lo ajustaban a sus particulares intereses, lo que evidencia la incursión en reprochables medios ilegales que viciaron la voluntad de la administración pública, y que fueron



Continuación de la Resolución No. No 0024 09 ENE. 2007

Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

determinantes en la producción de un acto administrativo mediante el cual se les concedió el beneficio de un régimen normativo que ya no era aplicable.

ii. En cuanto al análisis que el apoderado hace a la "... 2) "comunicación del 9 de junio de 2003"..."

El apoderado manifiesta su desacuerdo con las conclusiones que en relación con la comunicación en cita, se realiza en la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, al considerar que el DAPD, confunde medio ilegal con la simple ilegalidad que en su concepto se presenta en la mencionada comunicación. Sobre el particular proceden las siguientes apreciaciones:

- En la Resolución No. 00953 se señala que la comunicación del 9 de junio de 2003 constituye un medio ilícito concurrente con los analizados en la expedición de la licencia porque *"...para esa fecha ya estaba lo suficientemente vencido el plazo para allanarse el interesado a completar y corregir los requisitos que le habían sido exigidos para dar por presentada en debida forma la solicitud;... ya se habían configurado los presupuestos para entender desistida la petición; y finalmente, porque al haber revivido el plazo al solicitante, se avalaba la continuidad del trámite de un proyecto constructivo, con unas normas que ya no le eran aplicables..."*. No cabe duda pues, que la decisión equivocada adoptada por un empleado de la Curaduría, inclusive sin ser competente, constituye uno más del conjunto de medios ilegales ocurridos en la actuación que igualmente contribuyó, a través de la prolongación en el tiempo dentro del que se produjo un cambio normativo, en la expedición de una licencia que si bien en su contenido adolece de ilegalidad, lo real y cierto es que esa decisión contraria a derecho, fue consecuencia de los medios ilegales que en el procedimiento se sucedieron y que permitieron, como en repetidas ocasiones se ha manifestado, la aplicación de un régimen normativo al que no se tenía derecho.

- Lo anterior se explica por el hecho de que, si un medio ilegal que permite revocar cualquier acto administrativo sin el consentimiento expreso y escrito del titular, es, en las propias palabras del apoderado *"... el que esta conformado por conductas o actuaciones abiertamente fraudulentas tendientes a engañar al Estado y sacar ventaja injusta e ilícita de ese engaño, pero no a las supuestas ilegalidades en que puede incurrir un acto administrativo en un trámite complejo..."*, es claro que no solo la comunicación del 9 de junio de 2003 sino las demás actuaciones ilegales (que pueden estar contenidas en un acto administrativo de trámite, o en un medio probatorio aportado a la actuación) verificadas a lo largo del procedimiento que derivó en la expedición de la Licencia de Construcción No. LC 04 – 4 – 0861, fueron determinantes en su expedición, e que imponen a la Administración su revocatoria sin el consentimiento expreso y escrito de su titular, según así lo establece en su parte final el inciso segundo del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo y conforme a las precisiones realizadas por el Consejo de Estado en la Sentencia de Interés Jurídico IJ – 029 – 2002.

iii. En cuanto al análisis que el apoderado hace a la "... 3) Resolución No. 03 – 4 0485 del 9 de septiembre de 2003"..."



Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

Sea lo primero reiterar la equivocación en la que incurre el apoderado, al considerar que las "supuestas ilegalidades" encontradas en la Resolución No. 03 – 4 – 0485 del 9 de septiembre de 2003, no constituyen medios ilegales en relación con la Licencia de Construcción No. LC 04 – 4 – 0861 del 30 de junio de 2004, toda vez que ello contraviene no solamente la propia definición que él hace de lo que es un medio ilegal, sino que pierde de vista que la revocatoria proferida por la Entidad, mediante la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, es respecto de la Licencia de Construcción No. LC 04 – 4 – 0861, mas no de la Resolución No. 03 – 4 – 0485 del 9 de septiembre de 2003, acto administrativo de trámite mediante el cual se revivió un procedimiento que bajo ninguna circunstancia era legalmente posible continuar porque había operado el desistimiento tácito y ya el proyecto arquitectónico presentado no correspondía a las previsiones de la norma vigente y aplicable al predio, lo que constituye otro más de los medios ilegales que posibilitaron la expedición del acto administrativo revocado

2.5. En cuanto al numeral 3, del capítulo I., del escrito de reposición, denominado "En cuanto a los Fundamentos fácticos y jurisprudenciales adicionales que viabilizan la posibilidad de revocatoria directa de la Licencia de Construcción No. LC 04 – 4 – 0861 del 30 de junio de 2004".

En lo relacionado con el numeral 7 de los Razonamientos del Despacho, contenidos en la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, el apoderado realiza el siguiente análisis:

Con posterioridad a la Ley 9 de 1989 "... y a diferencia de lo argumentado por la Directora del DAPD, si existe ley que derogó tácitamente el artículo 65 de la ley 9 de 1989, por cuanto el Presidente de la República expidió el Decreto ley 2150 de 1995, "Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.", el cual en el parágrafo del artículo 95 señala: ... el citado parágrafo fue objeto de análisis por la Honorable Corte Constitucional que en Sentencia de Constitucionalidad 644 de 2000 señaló: ... Según lo expuesto y al contrario de lo afirmado por la Directora del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, queda claro que el artículo 65 de la ley 9 de 1989, fue derogado por el parágrafo del artículo 95 del Decreto Ley 2150 de 1995, razón por la cual no es cierto que mi representada no esta autorizada para iniciar las obras aprobadas en la licencia de construcción No. LC 04 4 – 0861 del 30 de junio de 2004..."

Respecto de la anterior inferencia es necesario precisar:

a. En cuanto a qué debe entenderse por derogatoria tácita de una norma.

El Consejo de Estado³⁵, ha señalado que la "... derogatoria de las leyes, según lo dispuesto en el artículo 71 del Código Civil, puede ser expresa o tácita,... en tanto que es tácita "cuando la

³⁵ CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCIÓN QUINTA – Consejera ponente: MARÍA NOEMÍ HERNÁNDEZ PINZÓN – Bogotá D. ., cinco (5) de agosto de dos mil cuatro (2004) – Radicación número: 19001-23-31-000-2003-0901-01(3294) – Actor: CÉSAR GIRALDO ARAUJO POMELO – Demandado: ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA



Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior"; además, según lo dispuesto en la Ley 153 de 1887 artículo 3º "Estímase insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regule íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería". En este estado de cosas, la derogatoria de una norma jurídica sólo puede presentarse bajo dos modalidades legales, la derogatoria expresa, que no es cosa distinta de una regulación ulterior sobre la misma materia, en la que de manifiesto se dice abrogarse el dispositivo legal que con antelación regulaba la materia, y la derogatoria tácita, por virtud de la cual una nueva regulación sobre la misma materia se impone a la anterior, dejando sin efectos sus alcances, bien sea porque se realizó una regulación íntegra o porque se dictó una norma especial..."(negrillas y subrayas fuera de texto)

b. Alcance de la regulación realizada en el artículo 95 del Decreto-ley 2150 de 1995.

- El párrafo del artículo 95³⁶ del Decreto-ley 2150 no regula situación diferente a la contenida en el Capítulo X, del Título I, Parte Primera del Código Contencioso Administrativo, referente a la forma de publicitar los actos administrativos de carácter particular y concreto, disposiciones que en materia de licencias urbanísticas, como actos administrativos que también revisten ese carácter, les son aplicables, obviamente con prevalencia de lo que regulen leyes especiales, conforme así lo prevé el mismo ordenamiento en el inciso segundo del artículo 1º.

- En efecto, una licencia urbanística es un acto administrativo que además de generar un beneficio particular y concreto a su titular, se fundamenta en normas de orden público (el derecho urbanístico es parte del derecho público), cuya estricta sujeción es un tema de interés no solo en la esfera particular del beneficiado con ella, sino de la totalidad de la colectividad, es decir de los interesados en los efectos generales que su expedición comporta y que también pueden verse afectados directamente. Tan clara resulta esa preceptiva que con posterioridad a su expedición, la Ley 472 de 1998 "Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.", incluye entre los derechos e intereses colectivos susceptibles de ser protegidos mediante acciones populares, "... la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera

³⁶ **Artículo 95º.-** Publicaciones en el Diario Oficial. A partir de la vigencia del presente Decreto, sólo se publicarán en el Diario Oficial, los siguientes documentos públicos:

a) Los actos legislativos y los proyectos de reforma constitucional aprobados en primera vuelta;

b) Las leyes y los proyectos de Ley objetados por el Gobierno;

c) Los Decretos y resoluciones ejecutivos expedidos por el Gobierno Nacional, cuya vigencia se determinará en el mismo acto de su expedición, y los demás actos administrativos de carácter general expedidos por las entidades u órganos del orden Nacional, cualquiera que sean las ramas u organizaciones a las que pertenezcan;

d) Los actos de disposición, enajenación, uso o concesión de bienes Nacionales; e) La parte resolutive de los actos administrativos que afecten de forma directa o inmediata, a terceros que no hayan

intervenido en una actuación administrativa, a menos que se disponga su publicación en otro medio oficial destinado para estos efectos o en un periódico de amplia circulación en el territorio donde sea competente quien expidió las decisiones;

f) Las decisiones de los organismos Internacionales a los cuáles pertenezca la República de Colombia y que conforme a las normas de los correspondientes tratados o convenios constitutivos, deban ser publicados en el Diario Oficial.

Parágrafo.- Los actos administrativos de carácter particular y concreto surtirán sus efectos a partir de su notificación y no será necesaria su publicación



Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes;...” (artículo 4º literal m).

- De igual manera, este Despacho no considera relevante ni procedente para el punto objeto de debate (que no es otro diferente al establecer si el artículo 95 del Decreto-ley 2150 derogó tácitamente al artículo 65 de la Ley 9 de 1989), la remisión jurisprudencial que el apoderado hace de la Sentencia de Constitucionalidad 644 de 2000, toda vez que ella refiere a un análisis de constitucionalidad al texto, pero ni tácita ni expresamente hace alusión alguna a si dicha norma, de la que este Despacho no duda su constitucionalidad, puede entenderse derogatoria del artículo 65 de la Ley 9 de 1989.

- En conexión con lo anterior, pero no menos importante, es que tal como se indicó, el Consejo de Estado, en el año 2001, esto es, 6 años luego de expedido el Decreto Nacional 2150 de 1995, expresó con toda claridad que “... mientras el acto administrativo por el cual se concede una licencia de construcción, no se encuentre ejecutoriado ni se hayan pagado los impuestos, no le es dado a su titular iniciar las obras. Y puesto que el actor admite no haber publicado dicho acto, contra lo ordenado en el artículo 9º del Decreto 1319 de 1993, resulta manifiesto que la licencia ni estaba en firme ni producía efectos respecto de terceros, y menos el efecto de dar pie a una nueva renovación...”. Al respecto se aclara que el artículo 9º del Decreto 1319 de 1993 (reglamentario del Capítulo VI de la Ley 9ª de 1989), citado en la Sentencia del Consejo de Estado, ordenaba que en materia de licencias, se adoptara el proceso establecido en el artículo 65 de la Ley 9 de 1989, toda vez que señalaba que “... El acto administrativo por el cual se concede o modifica la licencia, será notificado a su titular y a los vecinos dentro de los cinco (5) días siguientes a su expedición, de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo y será publicado para que surta sus efectos respecto de terceros en los términos previstos por el artículo 65 de la Ley 9a. de 1989.”(Negrillas y subrayas fuera de texto), normas que permiten demostrar la vigencia en el año 2001 y en la actualidad, de la obligación de publicar la parte resolutive, con el fin de que surta efecto respecto de terceros y pueda predicarse su ejecutoria para ellos y claro está, para el interesado (titular), como así lo manda el artículo 65 en cita.

- Para terminar el presente análisis y si como lo afirma el apoderado, el artículo 65 de la Ley 9 de 1989 se encuentra derogado por el artículo 95 del Decreto-ley 2150 del año 1995, este Despacho no entiende el porqué, no sólo el Consejo de Estado lo considera vigente en sus sentencias, sino que en la actualidad los Curadores Urbanos, una vez expiden las Licencias Urbanísticas, advierten a sus titulares el deber de publicación de la parte resolutive en un periódico de amplia circulación.

Por todas las razones anteriores, este Despacho reitera que:

- A la sociedad **ALTOS DE BELMONTE I**, no le era dado iniciar las obras autorizadas en la Licencia de Construcción No. LC 04 – 4 – 0861, por cuanto no se allanó a cumplir con la obligación prevista en el artículo 65 de la Ley 9 de 1989, consistente en la publicación de la



Continuación de la Resolución No. No 0024 09 ENE. 2007

Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

parte resolutive de dicho acto administrativo en un diario de amplia circulación en el Distrito Capital o en otro medio de comunicación social hablado o escrito.

- En la presente actuación ni el apoderado ni el titular de la licencia objeto de debate, pueden hablar de derechos adquiridos y/o desmedro patrimonial, porque inclusive a la fecha no han adquirido el derecho a iniciar obra alguna en ejecución de la licencia revocada.

- Conforme a lo anterior, este Despacho considera urgente y necesario poner en conocimiento las situaciones hasta aquí encontradas en relación con la Licencia de Construcción No. LC 04 – 4 – 0861 del 30 de junio de 2004, a la Alcaldía Local de Chapinero, para que esa autoridad, en ejercicio de las competencias de control urbano a ellas asignadas en el Acuerdo Distrital 79 de 2003 “*Por el cual se expide el Código de Policía de Bogotá D. C.*”, proceda a tomar las medidas que considere legalmente oportunas y procedentes.

2.6. En cuanto a la alegación final del apoderado, consistente en que “... Teniendo en cuenta que en caso de confirmarse la presente Resolución mi representada se vería afectada por cuantiosos perjuicios económicos derivados de la paralización de la obra de construcción que actualmente esta(Sic) en curso y con el fin de configurar los supuestos de responsabilidad de los funcionarios públicos que participaron en esta decisión previstos en la Ley 678 de 2001, adjunto a la presente el Anexo No. 3 que contiene la relación de los perjuicios de mi representada, la cual a la fecha no incluye la valoración del costo por daño moral.”

Al respecto, es pertinente iniciar con la consideración final realizada en el numeral 2.5., del presente acto administrativo, consistente en que los titulares de la Licencia de Construcción No. LC 04 – 4 – 0861 del 30 de junio de 2004, a la fecha no han adquirido el derecho a iniciar obra alguna autorizada en ese acto administrativo, por el hecho simple de no haber cumplido con la obligación de publicar la parte resolutive de esa licencia en un periódico de amplia circulación, tornándola carente de ejecutoria tanto para su titular como para los terceros, afirmación que además se sustenta en lo que al respecto ha señalado el Consejo de Estado en su Jurisprudencia y en consecuencia, deslinda de cualquier causal generadora de responsabilidad a la Administración y/o a sus servidores públicos toda vez que ningún tipo de construcción allí realizada es oponible a los terceros y/o la administración, no pudiendo predicarse la causación del pretendido y alegado daño antijurídico.

Ahora bien, en la medida que dentro del trámite administrativo 02 – 4 – 0896, se ha demostrado: i. la realización de una serie de actuaciones ilegales que derivaron en la expedición de la Licencia de Construcción No. LC 04 – 4 – 0861, ii. que dichas actuaciones son evidentes medios ilegales, por ser los que permitieron la expedición de un acto administrativo como la Licencia de Construcción No. LC 04 – 4 – 0861 del 30 de junio de 2004 y, iii. que dichos medios ilícitos fueron debidamente probados, son ostensibles dentro de la actuación y fueron determinantes en la expedición del acto administrativo revocado; no es solo procedente sino necesario y ajustado a derecho confirmar la revocatoria de la Licencia de Construcción No.



Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

LC 04 – 4 – 0861 del 30 de junio de 2004 expedida por el Curador Urbano No. 4 de esta ciudad, debiéndose reiterar que esa decisión no vulnera, como el apoderado parece indicar, los principios de buena fe, confianza legítima y presunción de legalidad, ya que como se indicó en la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006:

"(...)

5. De los principios de buena fe, confianza legítima y presunción de legalidad,

La sentencia de interés jurídico del Consejo de Estado, en lo pertinente indica:

"(...)

Es decir que para esta Corporación, atendiendo el principio de buena fe y la presunción de legalidad que ostentan los actos de la administración, amén de tener en cuenta razones de seguridad jurídica y de respeto a las situaciones jurídicas subjetivas que han quedado consolidadas en cabeza de una persona mediante decisiones en firme, salvo una evidente violación del ordenamiento jurídico, un acto de carácter particular y concreto solo podrá ser revocado con el consentimiento expreso del particular.

En una circunstancia de manifiesta ilegalidad, sin embargo, la aplicación del principio de buena fe deberá operar es en beneficio de la administración para proteger el interés público, pues en este caso la actuación fraudulenta con la que se dio origen o desarrollo a la actuación de la administración rompe la confianza legítima que sustenta la presunción de legalidad del acto expedido bajo tales circunstancias.

El acto administrativo que así lo declare deberá en todo caso hacer expresa mención de dicha circunstancia y de la totalidad de los elementos de juicio que llevaron al convencimiento de la administración, lo cual implica necesariamente la aplicación de un procedimiento que permita a la Administración reunir dichos elementos de juicio.

Al respecto la Corte constata que de acuerdo con el Código Contencioso Administrativo, ya sea que la revocatoria proceda con o sin el consentimiento del particular, ésta está sometida en todo caso al procedimiento establecido en el artículo 74 del Código Contencioso Administrativo

(...)” (Negrillas fuera de texto)

En el trámite administrativo que derivó en la Licencia de Construcción No. LC 04 – 4 – 0861 del 30 de junio de 2004, no es pertinente alegar desconocimiento de la confianza legítima, como fundamento del principio de legalidad de los actos administrativos, dada la evidente violación que al ordenamiento jurídico ha causado la decisión en cita cuya revocatoria directa se ha impetrado. Al haber quedado comprobada la ilegalidad en su conformación, la revocatoria resulta procedente, aún sin el consentimiento del particular, por cuanto además de haberse evidenciado los medios ilegales determinantes en su expedición, se ha respetado el procedimiento para ello establecido en el artículo 74 del C.C.A.

(...)



Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

Los anteriores hechos, permiten señalar sin lugar a dudas que en el presente caso la Sociedad **ALTOS DE BELMONTE I**, no puede predicar confianza legítima o derecho adquirido alguno en relación con la revocatoria de la Licencia de Construcción No. LC 04 – 4 – 0861 del 30 de junio de 2004, en la medida que tal como lo indica la Jurisprudencia del Consejo de Estado, solamente goza de tal privilegio, el constructor que ha realizado hechos inequívocos de validez ofrecidos “por al estado”, lo que no se verifica en el evento que nos ocupa, pues con claridad y a partir de los hechos transcritos en precedencia, las actuaciones ejecutadas por el interesado no gozan inequívocamente de validez, determinantes en la decisión administrativa.

(...)”

Medios ilegales que al haberse verificado, no derivan ni para los servidores públicos intervinientes en la revocatoria del acto con el cual concluye la actuación, ni para la Administración; ningún tipo de responsabilidad, toda vez que como se expresó en la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, el Consejo de Estado³⁷ ha indicado: “... en este orden de ideas, se tiene que en aquellos casos en los que la parte demandante se lucra y beneficia con la expedición de una licencia de construcción que, si bien está amparada por la presunción de validez, resulta manifiestamente ilegal, las autoridades públicas no están llamadas a reparar los perjuicios provenientes de la suspensión de sus efectos por cuanto en ese caso, no se genera un daño antijurídico, por cuanto la confianza de los constructores sólo goza de protección jurídica cuando resulta legítima, esto es, cuando el beneficiario del estado actúa de tal forma que sus conductas u omisiones sean merecedoras de la confianza, pues se fundamentaron en hechos inequívocos de validez ofrecidos por al Estado y no omitieron el conocimiento de las circunstancias que resultaban determinantes en la decisión administrativa. (...)” (Negritas y subrayas fuera de texto).

3. Consideración adicional.

Para terminar, es importante resaltar que en el escrito de reposición, el apoderado hace una férrea y acuciosa defensa para desvirtuar la totalidad de apartes de la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, que se refieren a la configuración de medios ilegales en la expedición de la Licencia de Construcción No. LC 04 – 4 – 0861 del 30 de junio de 2004; sin embargo, y en la permanente defensa de la juridicidad que debe ser norte en el desempeño de la profesión de abogado, no hace pronunciamiento alguno en cuanto a lo señalado por este Despacho en la providencia recurrida, referente a que “... Adicionalmente a todas las irregularidades detectadas en el trámite de la licencia y que incidieron en la decisión que se adoptó, merecen especial atención las conclusiones a las que llegó la Subdirección de Planeamiento Urbano del DAPD, tanto en el primero como en el segundo concepto técnico emitido en relación con el caso objeto de debate, memorandos donde esa dependencia concluye que el proyecto urbanístico denominado Altos de Belmonte I, si bien es cierto fue objeto de licenciamiento con normas del

³⁷ Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Consejero Ponente ALIER EDUARDO HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ – Expediente No. 12.185 (R – 5732) – Bogotá D. C., 5 de diciembre de 2005.



Continuación de la Resolución No. Nº 0024 09 ENE. 2007

Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

Acuerdo 6 de 1990 y sus decretos reglamentarios (que como se ha probado, no era aplicable en el presente caso) no cumple en varios aspectos con esa normativa. No más basta con remitirnos a tal estudio en el cual sin ninguna duda se afirma:

"En estas condiciones, El Curador no tuvo elementos de juicio suficientes para adoptar la licencia de construcción. (...)"

Igualmente al absolver las objeciones al concepto técnico la cita Subdirección señaló:

*(...) 8- Sobre este punto, se ratifica que en nuestro concepto los planos arquitectónicos presentados como soporte para la expedición de la licencia del conjunto Altos de Belmonte 04-4-0861 del 30 de junio de 2004, **no cuentan con la suficiente información para determinar el cumplimiento de las normas arquitectónicas**. Lo anterior de conformidad con lo indicado en el Decreto 1052 de 1998, Artículo 9....":*

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Abstenerse de conceder, por improcedente, el recurso subsidiario de apelación interpuesto en el memorial radicado el 15 de noviembre de 2006, mediante escrito con número de radicación DAPD 1 – 2006 – 42007, de conformidad con lo expuesto en el acápite **Precisión Previa de los RAZONAMIENTOS DEL DESPACHO.**

ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, conforme a los argumentos contenidos en los Razonamientos del Despacho.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente decisión al señor **ALFONSO GARCÍA GALVIS**, representante legal de la sociedad **ALTOS DE BELMONTE I LTDA.**, titular de la Licencia de Construcción No. LC 04 – 4 – 0861 del 30 de junio de 2004, expedida por el Curador Urbano No. 4 de esta ciudad, o a su apoderado, al Contralor Distrital, al Secretario Técnico de la Comisión de Veedurías a las Curadurías Urbanas y al Agente del Ministerio Público.

ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la presente decisión y de la totalidad de la actuación administrativa surtida por el Curador Urbano No. 4 de esta ciudad, a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que dicho organismo jurisdiccional adelante las actuaciones de su competencia.

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente decisión y de la totalidad de la actuación administrativa surtida por el Curador Urbano No. 4 de esta ciudad, a la Procuraduría General de la Nación, con el fin que dicho organismo de control adelante las actuaciones de su competencia.



Continuación de la Resolución No. No 0024 09 ENE. 2007

Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

ARTÍCULO SEXTO: Enviar copia de la presente decisión a la Alcaldía Local de Chapinero, con el objeto de que dicha autoridad dentro de las competencias policivas en materia urbanística que le han sido asignadas por la Ley, adelante las actuaciones a que haya lugar.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra esta Resolución no procede ningún recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C. a los **09 ENE. 2007**

CATALINA VELASCO CAMPUZANO
Secretaria

Proyectó: Jorge Ramírez
Vo. Bo. Fabiola Ramos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

Secretaría Distrital de
PLANEACIÓN

DILIGENCIA DE NOTIFICACION

En la ciudad de de Bogotá, D.C., a los 16 Días del mes de Enero de dos mil siete (2007), se notifica personalmente a CESAR HUMBERTO SIERRA PEÑA Identificado (a) con cédula de Ciudadanía No. 19.363.840 de Bogota con Tarjeta Profesional de Abogado No. 45.625 Expedida por: C. S. J., en su calidad de Apoderado especial del Dr Francisco J. Córdoba (contraloría Distrital de Bogota) del contenido de la Resolución No. 024 del 9 de Enero De 2007

Se indica al notificado que contra la presente resolución no procede recurso alguno.

Se le hace entrega al mismo de una copia íntegra, auténtica y gratuita de la Resolución referida.


EL NOTIFICADO


EL NOTIFICADOR

Bogotá sin indiferencia

EDICTO

LA SECRETARIA DE LA SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL

HACE SABER:

Que dentro del recurso de reposición presentado por el doctor **ALFONSO VALDIVIESO SARMIENTO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.084.390 t Tarjeta Profesional de Abogado No. 11294 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, en su calidad de apoderado especial de la sociedad **ALTOS DE BELMONTE I LTDA.**, contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, proferida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, se expidió la Resolución No. 0024 del 09 de enero de 2007, cuyo encabezamiento y parte resolutive dice, respectivamente:

"Por la cual se decide un recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Abstenerse de conceder por improcedente el recurso subsidiario de apelación interpuesto en el memorial radicado el 15 de noviembre de 2006, mediante escrito con número de radicación DAPD 1 – 2006 – 42007 de conformidad con lo expuesto en el acápite **Precisión Previa de los RAZONAMIENTOS DEL DESPACHO.**

ARTICULO SEGUNDO. Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 00953 del 12 de octubre de 2006, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, conforme a los argumentos contenidos en los razonamientos del Despacho.

ARTÍCULO TERCERO: Notifica el contenido de la presente decisión al señor **ALFONSO GARCÍA GALVIS**, representante legal de la sociedad **ALTOS DEL BELMONTE I LTDA.**, titular de la Licencia de Construcción LC 04 – 4 – 0861 del 30 de junio de 2004, expedida por el Curador Urbano No. 4 de esta ciudad o a su apoderado, al Contralor Distrital, al Secretario Técnico de la Comisión de Veedurías a las Curadurías Urbanas y al Agente del Ministerio Público.

ARTICULO CUARTO. Enviar copia de la presente decisión y de la totalidad de la actuación administrativa surtida por el Curador Urbano No. 4 de esta ciudad, a la Fiscalía General de la Nación, con el fin que dicho organismo jurisdiccional adelante las actuaciones de su competencia.

ARTICULO QUINTO. Enviar copia de la presente decisión y de la totalidad de la actuación administrativa surtida por el Curador Urbano No. 4 de esta ciudad, a la Procuraduría General de la Nación, con el fin que dicho organismo de control adelante las actuaciones de su competencia.

ARTICULO SEXTO. Enviar copia de la presente decisión A LA Alcaldía Local de Chapinero, con el objeto de que dicha autoridad dentro de las competencias policivas en materia urbanística que le han sido asignadas por la Ley, adelante las actuaciones a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE."

Se fija el presente edicto para notificar a los doctores **ALFONSO VALDIVIESO SARMIENTO**, apoderado especial de la Sociedad **ALTOS DE BELMONTE I LTDA.**, arriba identificado y **LUIS ARMANDO PALOMÁ BERNAL**, en su calidad de Agente del Ministerio Público.

FIJADO: 17 JAN 2007 a las 8:00 a.m.


MALENA SANTOS ORTEGA
Secretaria

Desfijado: 31 JAN 2007 a las 5:30 p.m.


MALENA SANTOS ORTEGA
Secretaria

Elaborado por: Yolanda González Cn.